

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación

Convocatoria 2017-2019

Tesis para obtener el Título de Maestría de Investigación en Relaciones Internacionales con
Mención en Seguridad y Derechos Humanos

Cambios en las dinámicas entre actores armados y dinámicas económicas en El Chical tras la
firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016

Edison Geovanny Guerrón Raza

Asesora: Cécile Mouly

Lectores: Ernesto Vivares y Freddy Rivera

Quito, enero de 2023

Dedicatoria

A Lilith.

A Edy y Moraima.

Pilares del cumplimiento de mis sueños.

Epígrafe

Yo no sé de dónde soy,
mi casa está en la frontera.

Y las fronteras se mueven,
como las banderas.

—Jorge Drexler

Índice de contenidos

Resumen	8
Agradecimientos	10
Introducción.....	11
Planteamiento de la pregunta central de investigación	12
Contextualización del caso de estudio	15
Aspectos metodológicos.....	19
Estructura de la tesis.....	22
Capítulo 1. Marco teórico	24
1.1. Áreas fronterizas	24
1.2. Interacciones entre actores armados en áreas fronterizas	29
1.2.1. Interacciones entre actores armados y relaciones de poder antes de la firma del acuerdo de paz de 2016	31
1.2.2. Interacciones entre actores armados y relaciones de poder post firma del acuerdo de paz de 2016	33
1.2.3. Modos de interacción entre grupos irregulares que operan en las fronteras .	37
1.3. Impacto de la firma del acuerdo de paz en las dinámicas del conflicto armado ...	41
Capítulo 2. Geografía económica y social de la frontera en la parroquia El Chical.....	48
2.1. Economía y comercio de la frontera rural andina entre Ecuador y Colombia	49
2.2. Características de la parroquia rural transfronteriza El Chical	49
2.3. Presencia del Estado en la zona fronteriza andina rural entre Ecuador y Colombia	54
2.4. Características productivas, laborales y comerciales de El Chical	57
2.5. Relación comercial binacional Ecuador-Colombia.....	63
2.6. Conclusiones	66
Capítulo 3. Seguridad, economía y paz en el contexto transfronterizo de la parroquia El Chical.....	68
3.1. Cambios en la presencia de actores violentos no estatales en el lado ecuatoriano	69
3.2. Influencia de los cambios de dinámicas entre actores armados no estatales sobre las dinámicas económicas en El Chical	73
3.3. Conclusiones	77
Conclusiones	78

Referencias bibliográficas.....	83
Anexos.	86
Anexo 1: Lista de personas entrevistadas	86
Entrevistas semiestructuradas	86
Comunicaciones personales y conversaciones	88

Índice de ilustraciones

Mapas

Mapa 0.1 Ubicación geográfica de la parroquia El Chical en la provincia del Carchi ...	17
Mapa 2.1. Situación geográfica de la provincia del Carchi y la parroquia El Chical en la frontera entre Ecuador y Colombia	50

Figuras

Figura 1. 1. Ejes y pilares del Plan Binacional de Integración Fronteriza	30
Figura 1. 2. Principales actores violentos no estatales en la frontera colombiana en el periodo del post acuerdo.....	35
Figura 1. 3. Principales esquemas de relación entre actores armados no estatales	39
Figura 1. 4 Las consecuencias del acuerdo de paz de 2016 para Ecuador	44
Figura 1. 5. Categorización del nivel de injerencia o impacto de las actividades ilícitas derivadas del conflicto armado en Colombia sobre el Ecuador.....	47

Tablas

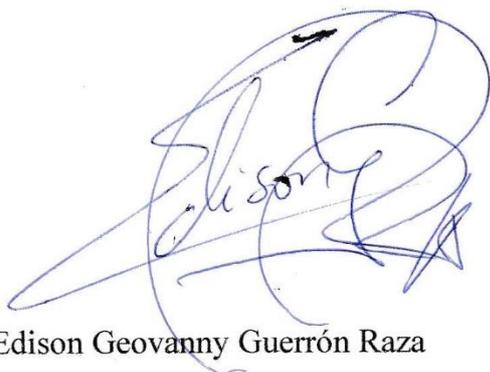
Tabla 2. 1. Distribución porcentual de la población de El Chical por grupo de ocupación	58
--	-----------

Declaración de cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Edison Geovanny Guerrón Raza, autor de la tesis titulada “Cambios en las dinámicas entre actores armados y dinámicas económicas en El Chical tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016”, declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de Maestría de Investigación en Relaciones Internacionales con Mención en Seguridad y Derechos Humanos, concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia de Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND e.0EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, enero de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edison', with a large, stylized flourish above it.

Edison Geovanny Guerrón Raza

Resumen

La presente investigación analiza los cambios en las dinámicas entre actores armados y las dinámicas económicas en El Chical tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016. La pregunta central que guía el estudio es ¿cómo las dinámicas entre grupos armados y las dinámicas económicas y comerciales en el poblado ecuatoriano de El Chical cambiaron o se mantuvieron tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano en 2016? Para responder esta pregunta se realizó un estudio de caso único sobre la parroquia limítrofe ecuatoriana El Chical, utilizando una metodología interpretativista que permitió la observación de las formas de interacción entre la población de dicha parroquia y la de Tallambí, del otro lado de la frontera, para analizar cómo funcionan allí las dinámicas de comercio transfronterizas y cuál ha sido la influencia de diferentes actores armados, particularmente después de la firma del acuerdo de paz de 2016.

Para realizar el análisis se partió desde una ontología interpretativista que permitió analizar las interacciones entre los actores armados, tanto estatales como no estatales, y los comportamientos de los grupos sociales que habitan la parroquia tomando en cuenta el contexto geográfico y cultural del sector, la producción agrícola y manufacturera de la zona y las vías de relacionamiento comercial hacia adentro y hacia afuera de la parroquia, es decir, el cómo se corresponden los mercados entre los habitantes de El Chical y los habitantes de Tallambí a nivel local, así como las interacciones comerciales de la parroquia con las urbes más cercanas, siendo estas las ciudades de Tulcán, Ibarra, Otavalo y Quito en Ecuador y poblados colombianos pertenecientes al departamento de Nariño en Colombia.

Epistemológicamente el trabajo se aborda desde el constructivismo alrededor de un marco teórico enfocado en los estudios fronterizos, como la teoría de las zonas fronterizas (*borderlands*) que entiende las fronteras como campos de integración y construcción social, y no como líneas de división. La perspectiva constructivista nos permite entender la intersubjetividad existente entre lo humano, lo material y lo comunitario, sin dejar de tomar en cuenta a la guerra como un elemento presente antes y después de la firma del acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016, sino más bien centrando las observaciones en los efectos que tuvo dicho acuerdo sobre las dinámicas microeconómicas entre los pobladores.

Los hallazgos de la investigación arrojan luces sobre cómo fluctuaron los grupos armados con presencia en esta zona fronteriza a raíz del acuerdo de paz de 2016, las acciones que llevaron a cabo los excombatientes que se acogieron a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, así como también los movimientos sobre el territorio que efectuaron los combatientes que decidieron no acogerse al proceso de paz y llegaron a formar disidencias, grupos delincuenciales y, en general, actores violentos no estatales cuyo interés primordial ha sido el control territorial de zonas que quedaron en disputa tras la salida de las FARC, con el fin de controlar la producción de cultivos ilícitos utilizados en la producción de sustancias sujetas a fiscalización.

Esta investigación aporta insumos teóricos y empíricos que pueden servir a los Estados para la planificación de políticas públicas y acciones concretas en el territorio estudiado. Asimismo, sirve de base para la comprensión de las interacciones sociales que permitan a los organismos no gubernamentales ejecutar intervenciones de prevención de conflicto y construcción de paz.

Agradecimientos

A la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sus autoridades, cuerpo docente, personal administrativo, personal de servicios y mis compañeros de facultad.

A Cécile Mouly, atalaya del conocimiento, guía paciente que, cual Vasudeva sobre el río de la sabiduría, ha guiado mi camino con la más absoluta comprensión y paciencia.

A Gabriela Lema, compañera de viaje.

A los habitantes de Quinshul, El Chical y Maldonado. Gente de hacha y machete, gente buena y trabajadora. A sus niñas y niños que me inspiraron desde la primera vez que pisé su suelo.

A Tulcán y a mis amigos.

Introducción

Desde sus inicios, las fronteras internacionales de América del Sur fueron concebidas como líneas de separación entre los países, a través de documentos formales, tratados internacionales, accidentes geográficos o líneas implícitas trazadas por la unión de hitos ubicados sobre los territorios. Su comprensión en Latinoamérica, desde la tradición clásica, deriva de procesos de cambio entre las repúblicas descolonizadas desde ámbitos diversos como el derecho internacional o enfrentamientos bélicos interestatales. La función de la frontera se redujo a la diferenciación de lo interno y lo externo, lo propio y lo ajeno, lo mismo y lo otro, el acá y el allá. En la actualidad, sin embargo, fenómenos más reales dan cuenta de que la división no se cumple a cabalidad cuando se trata de la supervivencia del ser humano, y la frontera ha pasado a ser entendida como un espacio de encuentro que permite la convivencia entre personas de un país y otro sobrepasando las líneas demarcatorias y los ciclos dinámicos de relacionamiento a través de mecánicas de comercio e intercambio de bienes, servicios y derechos, los vínculos sociales y familiares generados transversalmente en la zona fronteriza y la permeabilidad de las leyes de cada Estado.

Entre Ecuador y Colombia, aproximadamente 586 kilómetros de línea limítrofe separan el territorio continental de uno y del otro Estado. Podemos ver esa línea en los mapas e incluso visitar los hitos que la dibujan sobre el suelo o recorrer los accidentes geográficos que refuerzan la demarcación de la división interestatal, un borde tácito permanentemente atravesado por la verdadera zona fronteriza, esa amplia región construida socialmente entre la gente que la habita de forma transversal mediante prácticas cotidianas que abarcan dimensiones del espacio. Esa región tiene muchos kilómetros cuadrados y longitudinales con zonas pobladas urbanas y rurales sobre las que se desarrollan a diario miles de vidas en provincias, ciudades, parroquias, caseríos, comunidades y pueblos indígenas, afroamericanos y mestizos, zonas donde la selva sigue intangible y protegida estatalmente por su riqueza floral y faunística, por sus pueblos ancestrales y su historia precolombina, así como regiones donde la mano del hombre hace su vida. La zona fronteriza colombo ecuatoriana es un complejo ecosistema creciente en que fenómenos, cambios e intercambios se entretajan en una inmensa red social interconectada e interdependiente.

Sobre esta frontera ha pesado durante más de medio siglo el conflicto armado colombiano, cuyas características permiten identificarlo como un conflicto asimétrico, manifiesto y que

involucra a múltiples actores, con gran peso para la zona transfronteriza colombo ecuatoriana, dado el nivel de interconexión binacional. Nada que le afecte a uno de los dos países en la zona fronteriza carece de relación o efecto para con el país de junto. Es así que tras la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano en 2016, se produjeron cambios en las dinámicas de relacionamiento entre actores armados en los territorios del departamento colombiano de Nariño antes controlados por esa guerrilla, que influyeron directamente en la cotidianidad de los habitantes ecuatorianos de los pueblos colindantes. Tras la firma del acuerdo, los procesos de implementación supusieron el abandono de las FARC de los territorios que ocupaban cuando sus integrantes estaban alzados en armas. Los grupos armados beligerantes residuales comenzaron a participar de una serie de fenómenos subsecuentes derivados de procesos como el desarme de las FARC, la reinserción social de los exguerrilleros que se acogieron al proceso y la disidencia armada de los que no. Organizaciones y grupos de expertos, como por ejemplo la fundación Paz y Reconciliación (PARES) de Colombia o el equipo editorial y periodístico de Diario El Comercio de Ecuador, aseguran que hasta 2018 eran doce los grupos irregulares que se disputan los territorios abandonados por las FARC (El Comercio 2018). Estos fenómenos de cambio y sus alcances tuvieron impactos sobre las poblaciones aledañas que se llegaron a notar con más fuerza en el sector rural, donde la presencia del Estado es menor y los agentes no estatales adquieren un mayor grado de agencia sobre la estructura binacional, tanto en términos sociales como identitarios, económicos, geográficos y políticos.

Planteamiento de la pregunta central de investigación

En esta tesis se busca entender cómo las dinámicas entre actores armados y las dinámicas económicas y comerciales en el poblado ecuatoriano de El Chical cambiaron o se mantuvieron tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano en 2016. La presente investigación se enfoca en la zona rural de El Chical, parroquia ubicada en el noroccidente de la provincia ecuatoriana de Carchi, que colinda con la vereda Tallambí, pueblo rural colombiano con poca o casi nula presencia estatal, el cual hasta la firma del acuerdo de paz era controlado por la columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC, según el investigador colombiano Ariel Ávila en entrevista para el diario ecuatoriano *El Comercio*, y que en 2018 era territorio de disputa entre cinco grupos armados no estatales (El Comercio 2018). La presencia de estos grupos armados no estatales se entiende, ya que geopolíticamente El Chical tiene gran importancia e influencia sobre la estructura binacional

por constituirse en un eslabón de encadenamiento entre los dos mundos posibles de la frontera andina: por un lado, el sector selvático habitado por pueblos de la comunidad awá y colonos dedicados a la explotación maderera y minera, legal e ilegal, y cuyo centro poblacional es la parroquia de Tobar Donoso. Por otro lado, el puerto terrestre más importante de la frontera colombo ecuatoriana, cuyo epicentro es la conjunción urbana de los municipios de Ipiales, en Colombia, y Tulcán, en Ecuador, a través del viaducto transfronterizo Rumichaca, por el que pasa el grueso del comercio binacional y en donde es más notoria la presencia de los Estados a nivel formal e institucional.

Ambas fronteras urbana y rural constituyen el espacio terrestre de comercio más importante entre los dos países, con intercambios de importación y exportación mayoritaria y minoritaria de productos industriales y domésticos. Es el intercambio doméstico minoritario, al que he de referirme como micro comercio, el que importa a esta investigación, pues a diario los habitantes de uno y otro país cruzan la frontera para sus actividades sociales, mercantiles y laborales, no necesariamente dentro de los márgenes legales de cada república, sino también por fuera, a través de ciclos subterráneos de productos sujetos a fiscalización cuya producción, procesamiento y transporte se propicia mayormente en la ruralidad. O sea, el comercio tanto de productos que constan dentro de la canasta básica binacional transfronteriza como ropa, juguetes, víveres, tecnología de uso doméstico, artesanías, etc., así como drogas, armas o precursores químicos para su elaboración, órganos y hasta personas. Esa hibridación mercantil da paso a la conformación de modos y condiciones de vida *sui generis* que envuelven a los pobladores y los involucra en dinámicas especiales de convivencia.

Centrar la investigación en El Chical permite dar cuenta de la evolución del territorio en función de los cambios de dinámicas entre los grupos armados no estatales que operan en Nariño y los efectos que estos cambios conllevaron para las dinámicas comerciales transfronterizas luego de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno colombiano en 2016. Para elaborar el estudio se partió de una pregunta general que permitió orientar teórica y metodológicamente el proceso en función del cumplimiento del objetivo central de la investigación: ¿cómo las dinámicas entre grupos armados y las dinámicas económicas y comerciales en el poblado ecuatoriano de El Chical cambiaron o se mantuvieron tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano en 2016?

Para responder esta pregunta es necesario entender aspectos como el comercio binacional y la relación entre ecuatorianos y colombianos a partir de una visión detallada de la multidimensionalidad de la cohabitación de la zona transfronteriza. Más específicamente, se debe comprender cómo la vinculación entre ellos se produce en términos comerciales: cómo se producen los intercambios, qué compran y qué venden, cuáles son sus hábitos de producción consumo, qué necesidades afrontan en cada lado del borde limítrofe, hasta dónde puede llegar la relación en términos espaciales, cómo se benefician o perjudican mutuamente, cómo influye en la relación la geografía de la zona, cómo funcionan las dinámicas laborales, familiares, económicas y sociales en términos políticos, de identidad, cultura y gobernanza, cómo operan las decisiones gubernamentales y las políticas públicas de cada Estado sobre dicho territorio e incluso cómo operan los sistemas de gobernanza paralelos al margen del Estado.

Además, responder la pregunta implica la necesidad de delinear una aproximación geopolítica a la metamorfosis de las dinámicas de poder en los territorios sobre los que se centra este análisis, entendiendo cómo han operado históricamente todos los actores inmersos en el conflicto colombiano y cómo tras el abandono del mismo por parte de las FARC, luego de la firma del acuerdo de paz, esas metamorfosis se hicieron presentes en los territorios en disputa. También nos permite comprender qué grupos son los que se disputan dichas zonas, sus motivaciones y los efectos de sus acciones para la geografía, sus habitantes y los Estados. Entender estas nuevas dinámicas entre actores armados y sus implicaciones para la población civil del lado ecuatoriano de la frontera es importante del punto de vista académico porque no se han desarrollado muchos estudios de conflictos armados desde una perspectiva fronteriza binacional, lo que ha resultado en la invisibilización de lo que pasa del lado ecuatoriano. Una excepción es el trabajo de Annette Idler (Idler 2019; Idler, Mouly y Garrido 2018), quien ha estudiado las dinámicas fronterizas entre Ecuador y Colombia. Además, esta tesis aporta insumos valiosos para la práctica. En particular, sienta las bases para realizar análisis prospectivos alrededor del conflicto armado colombiano y los actores beligerantes que aún se mantienen en disputa en la zona de El Chical.

Una mirada más amplia a estos aspectos permite entender la vinculación directa de los habitantes ecuatorianos de El Chical con las dinámicas de un conflicto armado heredado,

conocer cómo algunos habitantes se involucraron directamente en la guerra interna colombiana o cómo las dimensiones de la misma han superado las líneas divisorias establecidas en los mapas. La investigación arroja nuevas luces sobre los alcances transnacionales del conflicto y la vinculación de actores externos por medio del comercio y la globalización de los mercados. Responder a esta pregunta también tiene un alcance prospectivo para los Estados, en especial para Ecuador, pues permite enfocar los análisis de sus políticas públicas y la aplicación de las mismas en términos mucho más amplios que los tradicionales realistas, ya que esboza cómo la interdependencia entre las dimensiones formales e informales de la vida de las comunidades transfronterizas funciona alrededor de la guerra y en el marco de sus dinámicas bélicas y económicas, y cómo respecto al conflicto se desarrollan actividades y relaciones sociales o familiares binacionales como trabajo, comercio, turismo, entre otras.

Para el campo de los Estudios Internacionales entender estos fenómenos de cambio desde la academia requiere superar la tradición clásica realista que definió a las fronteras como límites de separación territorial, establecidos para la distinción de entidades políticas y sus actores dentro de un sistema internacional en que los Estados se encargan de ejercer poder sobre otros Estados (realismo ofensivo de Morgenthau) y buscan reducir las amenazas externas (realismo defensivo de Waltz). Una visión más crítica permite superar la imagen estadocéntrica que ha fijado a las fronteras como contenedores espaciales e instrumentos de separación de alteridades en función de una representación simbólica de lo propio y lo ajeno, y amplía la luz del análisis hacia todos los factores y actores que intervienen en la relación binacional.

Contextualización del caso de estudio

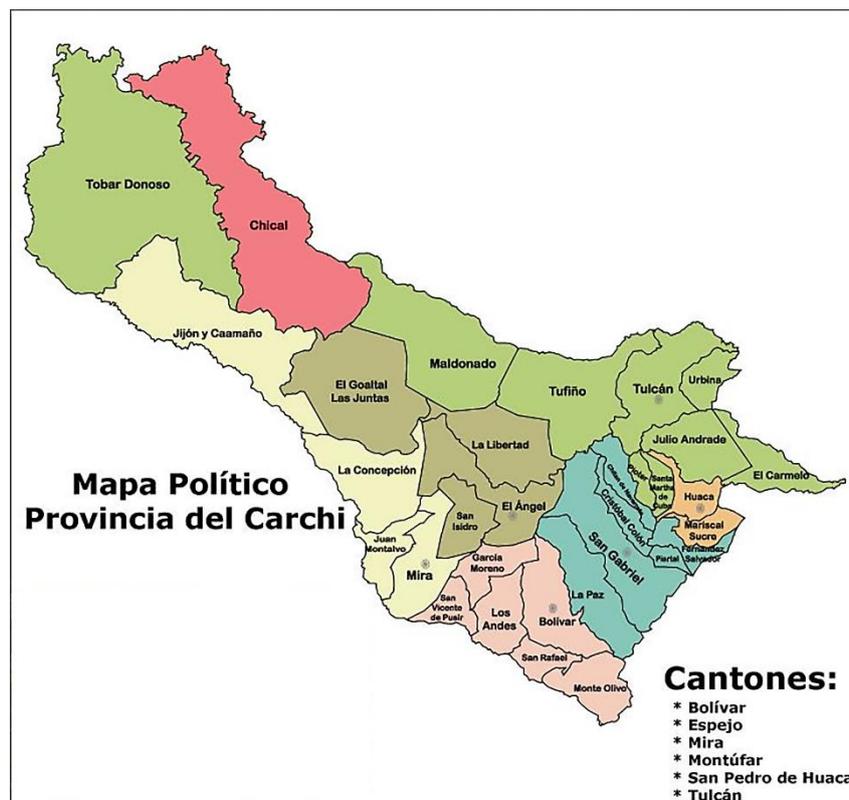
La provincia del Carchi se ubica en la parte norte del callejón interandino. Limita al este con la provincia de Sucumbíos, al sur y oeste con la provincia de Imbabura, al oeste con la provincia de Esmeraldas y por el norte con la República de Colombia. La extensión del territorio que abarca esta provincia es de aproximadamente 3.600 km² (Prefectura de Carchi 2021). La población de la provincia del Carchi es de unos 165,000 habitantes, lo que equivale al 1.1% del total de la población de Ecuador. Esta se distribuye en unos 80,000 individuos ubicados en el sector rural y unos 80,000 en el sector urbano. La actividad comercial de la provincia está predominada por el comercio, tomando en consideración que esta comparte

frontera con Colombia. Según Vasco (2016), el crecimiento siempre se orientó hacia la región andina central correspondiente a la zona nororiental de la provincia, apoyada en la carretera panamericana, la cual es considerada como eje vertebral de la actividad económica de la provincia. En esta zona se realiza un intenso intercambio económico con Colombia.

De la provincia de Carchi destaca su capital el cantón Tulcán que se extiende a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia. Este tiene una extensión de 1800 km² aproximadamente y limita por el norte con el municipio colombiano de Ipiales del departamento de Nariño. Dispone otros puntos de contacto con Colombia por el este y el oeste. Es decir limita con la provincia de Sucumbíos y Colombia por el este, también con este país y la provincia de Esmeraldas por el oeste. En el mapa 0.1 a continuación, se aprecia la distribución de las parroquias del cantón Tulcán. Una de las parroquias que disponen límites fronterizos con Colombia es la de El Chical. Esta se encuentra situada a unos 190 km de la ciudad de Tulcán y es una zona predominantemente rural.

La parroquia El Chical fue fundada y organizada en la desembocadura del río Chical en el río San Juan, localizada en una amplia planicie que cubre una extensión de 500 has entre el río San Juan, conocido también como río Mayasquer, y las estribaciones de la cordillera Quinshul. Su principal vía de acceso y comunicación es la carretera que va desde la comunidad Peñas Blancas hasta la ciudad de Tulcán. Las mujeres y niños se dedican a los quehaceres domésticos, también ayudan en las labores del campo (Conde y Orbe 2020, 33).

Mapa 0.1 Ubicación geográfica de la parroquia El Chical en la provincia del Carchi



Fuente: Vasco (2016)

Nota: Este mapa nos ayuda a entender la situación geográfica de la parroquia respecto a la frontera y la provincia del Carchi.

Según el gobierno autónomo descentralizado de El Chical (2021, 1), esta población tiene como principal actividad económica la ganadería, la agricultura y el comercio. La población es de unos 3500 habitantes. La ubicación estratégica de El Chical le permite disponer de acceso inmediato a Colombia por medio del puente que atraviesa el río Mayasquer o San Juan.

La población de El Chical ha tenido un acceso limitado a servicios básicos, como la cobertura en electricidad (Vasco 2016). Igualmente, su infraestructura vial ha tenido limitaciones.

Presenta dos vías de acceso: la primera por el sur desde el cantón Mira y la otra desde Tulcán. La mayoría de las personas para poder llegar a las cabeceras parroquiales deben desplazarse por senderos o picas, mientras que para acceder a Colombia solamente pueden hacerlo a través del puente sobre el río Mayasquer o San Juan. Mientras tanto, la red telefónica fija ha sido deficiente, puesto que hasta 2016 el 87,7% no contaba con este servicio y solamente el

5,6% disponía de internet (Vasco 2016, 35). La mayoría de la población de El Chical depende de la agricultura. Los excedentes de productos cosechados son comercializados en recintos cercanos.

La ubicación de la población de El Chical sobre el límite con Colombia ha traído algunas consecuencias para sus pobladores a raíz del conflicto armado que vive el país cafetero. A continuación, se exponen algunos eventos y las principales consecuencias. El diario *El Universo* (2020, 1) señala que del lado colombiano las masacres presentadas en Nariño, Samaniego y Pialapí, las cuales colindan con las provincias de Carchi y Esmeraldas, dejaron 18 muertos. Estos decesos se vinculan con el narcotráfico, aunado a un proceso de sometimiento de las comunidades indígenas Awá por parte de grupos armados. Eso obligó que las organizaciones Awá de Colombia y Ecuador tomaran acciones de organización comunitaria en conjunto con las autoridades civiles y militares ecuatorianas. Del lado ecuatoriano, líderes indígenas de esta comunidad han sido atacados. Estos mismos eventos han ocasionado que en la localidad de El Chical exista temor ante una posible arremetida armada.

Desde el año 2020 la población de El Chical se mantiene en una permanente zozobra, esto debido a que las unidades militares del lado colombiano que patrullaban las poblaciones fronterizas de San Juan, Nulpe, y Tallambí ya no están presente, lo cual genera las condiciones para que grupos irregulares inicien la disputa de la zona. Para de esta manera emplearla en sus actividades criminales como el contrabando, tráfico de estupefacientes y minería ilegal.

Entre las consecuencias más notorias de los enfrentamientos que se dan del lado colombiano cercano a la población de El Chical está la migración de personas de Colombia hacia esta localidad. Uno de estos escenarios fue el presenciado en el año 2018, entre el 22 y 23 de enero cuando una cantidad de 110 pobladores colombianos tuvieron que movilizarse hacia esta comunidad ecuatoriana, huyendo de los grupos armados (El Universo 2020, 2). La zona de El Chical ha visto el incremento de actividades de tráfico de estupefacientes. Rivera y Bravo (2020, 15) mencionan que la presencia de lanchas tipo *go-fast* son más frecuentes. Estas por lo general llegan por la corriente del Pacífico a la Isla de Cocos en Costa Rica.

Otro de los eventos que ha afectado al lado ecuatoriano fue el sucedido en el año 2018, específicamente el día 17 de marzo. Se dieron enfrentamientos entre grupos irregulares colombianos y el Ejército ecuatoriano (González 2018). Posteriormente, el 4 de mayo hubo un desplazamiento forzado de nueve familias conformadas por aproximadamente 40 personas que huían de un enfrentamiento entre grupos armados irregulares y la fuerza pública, como refiere Sindy González (2018) en su investigación sobre migraciones forzadas de los pueblos indígenas de la frontera.

Los grupos delictivos usan áreas cercanas a la población de El Chical para el procesamiento de drogas. En el año 2020 se detectó uno de estos laboratorios en San Marcos, parroquia El Chical, que tenía una capacidad para producir alrededor de 4 a 5 toneladas de estupefacientes mensuales (TeleAmazonas 2020). La presencia de estos laboratorios cerca de El Chical constituye un riesgo para la población, ya que por lo general están custodiados por grupos armados no estatales y se insertan en rutas de procesamiento y distribución de drogas que forman parte de redes sumamente amplias.

Aspectos metodológicos

Esta investigación es un estudio de caso único. Parte de una ontología interpretativista, es decir “la comprensión del mundo social a través de la interpretación del mundo por parte de sus participantes” (Bryman 2012, 380), pues es en las dinámicas de cohabitación entre El Chical y Tallambí donde se reflejan las dinámicas de poder y la taxonomía social que este conlleva en la región transfronteriza de los Andes colombo ecuatorianos. Se basa en la observación y el análisis de las mecánicas de comercio transfronterizo entendidas desde una episteme constructivista que “implica que las propiedades sociales son los resultados de las interacciones entre los individuos, en lugar de fenómenos externos y separados de los involucrados en su construcción” (Bryman 2012).

La delimitación del espacio analizado parte de la relevancia geopolítica de El Chical por tratarse de una localidad habitada que se localiza en una zona intermedia entre la zona rural, montañosa y selvática de la frontera ecuatoriana sobre la que se ubica la parroquia Tobar

Donoso de la provincia del Carchi y el linde fronterizo de la provincia de Esmeraldas; y por otro, la zona urbana del límite establecido entre los municipios Tulcán, en el lado ecuatoriano, e Ipiales, en el lado colombiano. Se llevó a cabo un rastreo de procesos (*process tracing*) que permitió establecer una serie de asociaciones de las variables del caso para poder explicar los mecanismos sociales que intervienen en las dinámicas económicas que se evidenciaron a nivel local en El Chical, incluyendo dinámicas comerciales de nivel micro entre dicha parroquia y la vereda colombiana de Tallambí, sin encausar el análisis hacia objeciones de tinte valorativo cuyo peligro principal es adjudicar prejuicios morales a los fenómenos. Todo esto se ha realizado en el marco temporal de tres años tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, pues los estudios de caso “permiten un examen intensivo de determinadas secuencias históricas y, al hacerlo, pueden contribuir al proceso de desarrollo de la teoría ayudando a aclarar el significado de las variables clave y la validez de los indicadores empíricos” (Levy 2002, 136).

Los datos analizados se recabaron principalmente mediante entrevistas semiestructuradas a los siguientes actores clave:

- el presidente de la junta parroquial de El Chical, Nilo Ortíz;
- la economista Anita Morillo, directora encargada de Desarrollo Económico Local del gobierno autónomo descentralizado provincial de Carchi;
- el ingeniero Diego Tarupí, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán.
- el sociólogo Santiago Cabrera, exjefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán.

También se llevaron a cabo cinco entrevistas semiestructuradas a pobladores locales dedicados al comercio de bienes y servicios en las zonas delimitadas para conocer la cotidianidad del comercio transfronterizo en esas zonas. No se menciona el nombre de estos pobladores en la tesis por cuestión de confidencialidad, a solicitud de los entrevistados. Asimismo, se llevaron a cabo dos conversaciones personales informales: una con el agrónomo tulcaleño Wilson Raza y otra con una persona de un organismo internacional que ha trabajado en El Chical y pidió no ser identificada (véase lista de personas entrevistadas en anexo 1).

Además, para la investigación fue menester recopilar archivos y documentos sobre el fenómeno del conflicto armado colombiano, economías lícitas e ilícitas que operan en la zona y los vínculos mercantiles que se establecen a partir de dichas economías y un archivo periodístico enfocado a las noticias fronterizas referentes a la localidad de El Chical. Estas últimas han sido compiladas desde noviembre de 2016 hasta finales del año 2019, es decir, a tres años de la firma del acuerdo de paz. Se incluyeron las noticias relacionadas a las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, en las que se produjeron sucesos de gran importancia en términos de violencia y conflicto transfronterizo y violaciones de derechos humanos. El tratamiento informativo y los temas abordados en esta documentación han sido insumos claves para entender las dinámicas de flujo y los fenómenos sociales alrededor de la zona limítrofe. Para ello también se revisó la información disponible en Internet, lo cual permitió encontrar valiosos aportes documentales y bibliográficos, así como la exploración de actores que tienen que ver directamente con el conflicto armado y cuya comunicación cotidiana se realiza mediante las redes, como por ejemplo las distintas fundaciones que estudian el conflicto armado en Colombia (Paz y Reconciliación, Ideas para la Paz, etc.).

Asimismo, se hizo un análisis de la evolución geográfica del conflicto colombiano con base en las investigaciones sobre áreas de desmovilización, desarme y reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, que contiene mapas en los que se ubican geográficamente las áreas de desarme, desmovilización y reintegración de los ex guerrilleros, y los informes de organismos no gubernamentales (ONG), como los informes de la oficina de International Crisis Group en Colombia o de la fundación Paz y Reconciliación de Colombia. El análisis de estos documentos se usó para entender cambios en las operaciones de los grupos armados en Nariño después de la firma de la paz y patrones situacionales de empleo, desempleo y comercio en las zonas abandonadas por la ex guerrilla. Además, se llevó a cabo el análisis de varios otros documentos y literatura relevante.

Finalmente, se realizó la observación directa en territorio en la parroquia El Chical, para lo cual fue necesario habitar en el lugar durante un lapso de tres semanas en marzo de 2019. Durante este periodo la convivencia directa con los pobladores locales permitió observar y entender cómo funcionaban las dinámicas económicas en el lugar, así como las interacciones entre civiles y actores armados en la zona de frontera y su incidencia en las dinámicas

económicas a nivel local. Asimismo, mi experiencia como profesor en El Chical antes de la firma del acuerdo de paz de 2016, combinada con la observación in situ en El Chical durante tres semanas en 2019, fue una ventaja para entender los cambios ocurridos a partir de la firma del acuerdo de paz en estas dinámicas.

Estructura de la tesis

La presente tesis inició con el planteamiento del problema de investigación y avanza hasta los resultados obtenidos de la misma a lo largo de cuatro capítulos. La presente introducción ofrece un panorama general del tema de investigación y la problemática existente alrededor de las fronteras, sus antecedentes y la influencia de estos para delimitar la investigación. También ofrece una explicación acerca del objetivo central de la investigación. Además, presentó de forma breve las bases teóricas en las que se enmarca el presente estudio.

El primer capítulo de la tesis es el marco teórico que cimienta la investigación académica. Se divide en tres aristas que corresponden a diferentes tipos de literatura: (1) las zonas de frontera, (2) las dinámicas entre actores armados por el control territorial y (3) los flujos económicos de las economías de sombra o economías informales que operan sobre la zona limítrofe de El Chical y Tallambí, alrededor del contexto bélico que opera en la frontera binacional, derivado del conflicto armado colombiano. La función de este capítulo es brindar una plataforma conceptual que soporte la interpretación cualitativa del fenómeno planteado como problema de investigación, además de discutir las perspectivas y los hallazgos de otros investigadores sobre estos temas.

El segundo capítulo es el primer capítulo empírico de la tesis. A partir de la aplicación de la metodología planteada, la experiencia vivencial en el territorio fronterizo de El Chical y la cohabitación temporal con sus habitantes para conocer directamente sus modos de vida y relacionamiento mantenido a través de la línea divisoria de los Estados, se examina cómo las pequeñas dinámicas cotidianas de comercio que realizan los habitantes (comprar víveres, vender productos locales, producir manufacturas, etc.) se han insertado dentro de estructuras comerciales más grandes que muchas veces forman parte de prácticas que están fuera del marco legal de los dos países colindantes.

El tercer capítulo es el segundo capítulo empírico de la tesis. Se basa principalmente en el análisis de las entrevistas realizadas en el territorio. Busca aterrizar los testimonios sobre el análisis de la influencia del espacio geográfico en la presencia de actores que llegaron a afectar la seguridad de la frontera a partir de la firma del acuerdo de paz de 2016. Discute la presencia de diferentes tipos de actores armados no estatales, incluyendo grupos vinculados al conflicto armado colombiano y grupos criminales y analiza cómo se reacomodaron en la parroquia de El Chical a partir de la firma del acuerdo de paz de 2016.

El cuarto capítulo presenta las conclusiones de la investigación. Ofrece una síntesis de las mismas y analiza sus implicaciones tanto a nivel teórico como práctico. Finalmente, culmina con unas recomendaciones respecto al problema planteado.

Capítulo 1. Marco teórico

El presente capítulo busca enmarcar la tesis en los estudios sobre áreas fronterizas, específicamente los relativos a las dinámicas del conflicto armado colombiano en la frontera colombo ecuatoriana, en especial luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016. Se divide en tres apartados. Primero, se revisa la literatura académica sobre áreas fronterizas y se discute cómo permite entender el fenómeno de estudio desde distintas perspectivas. Segundo, se discuten los estudios que versan sobre las relaciones entre actores armados en las zonas fronterizas. Tercero, se examina el impacto que tuvo la firma del acuerdo de paz de 2016 sobre las dinámicas del conflicto armado en las áreas fronterizas.

1.1. Áreas fronterizas

Esta investigación se ha trabajado desde una ontología interpretativista, bajo un planteamiento epistemológico constructivista, por lo que el marco teórico - conceptual se ha elaborado en función de interpretar y comprender las fronteras como espacios de construcción social. Para ello fue primordial utilizar la teoría de las zonas fronterizas (*borderlands*) que retoma el concepto de la frontera como espacio geográfico para redefinir su significado como lugar de negociación, resistencia identitaria y posicionamiento político (Anzaldúa 1999). De acuerdo a Baud y Van Schendel, las fronteras crean distinciones políticas, sociales y culturales, pero implican simultáneamente la existencia de (nuevas) redes y sistemas de interacción a través de ellas. La existencia de una frontera es nuestro punto de partida, pero al mismo tiempo llamamos la atención sobre las redes sociales que atraviesan la frontera (Baud y Schendel 1997, 216).

Al tratarse de un espacio transversal entre el final de un Estado y el inicio de otro, se constituye un espacio de anarquía en el que el régimen estatal pierde representación y las dinámicas sociales que allí se producen dejan de depender de la regulación legal formalista y constitucional. La perspectiva constructivista entiende a las estructuras sociales y normas como factores clave en la construcción de entendimientos intersubjetivos de las ideas, recursos materiales y prácticas sociales (Wendt 1992).

El análisis de las relaciones sociales e identitarias que se dan en las fronteras no puede dejar de lado el hecho de que los espacios anárquicos que estas constituyen también se convierten en zonas de proliferación de economías informales, en especial la frontera entre Ecuador y Colombia en la que la intensidad del conflicto armado colombiano ha involucrado a actores violentos no estatales con gran fuerza y presencia en la economía criminal mundial. En las fronteras coexisten mercados especiales, regímenes de comercio transnacionales que muchas veces no son consecuentes con las políticas estatales de cada lado de la línea divisoria, mercados que han sido estudiados por la vulneración que hacen de la legalidad de uno u otro país a partir de sus asimetrías y discordancias (Lauret 2009).

En el sistema de mercados que atraviesa la frontera colombo ecuatoriana la guerra se ha posicionado como un fenómeno casi natural que atraviesa las dinámicas de convivencia cotidiana de los habitantes, sobre la base de los intereses de sus participantes, lo que ha dado pie al involucramiento de los actores armados del conflicto en las dinámicas de comercio ilegal. Para muchos de esos actores los recursos económicos pasaron de ser un medio para alcanzar un fin a convertirse en el objeto mismo de la lucha, Cinthia Arnson y William Zartman explican que de forma más general en distintas zonas de conflicto en el mundo “El control de territorio y poblaciones se transformó en un objetivo económico y dejó de ser un objetivo puramente militar o estratégico, y la guerra se convirtió en un proyecto sumamente racional encaminado al enriquecimiento de unas elites o facciones particulares” (Arnson y Zartman 2006).

David Keen comparte esta visión al señalar que “la guerra no es simplemente el desmoronamiento de un sistema determinado, sino una manera de crear un sistema alternativo de beneficio, poder e incluso protección” (Keen 1998, 11). En su análisis Keen establece la importancia de la mercantilización de la violencia de la guerra y sugiere que muchas veces los conflictos de carácter político, como el caso de la guerra interna de Colombia, terminan convirtiéndose en “conflictos en los que los beneficios económicos a corto plazo son de capital importancia” (Keen 1998, 11).

Esta dinámica se inserta en el modelo de las nuevas guerras globalizadas en que se difumina la diferenciación entre lo estatal y lo no estatal, lo público y lo privado, lo externo y lo interno, entre la economía y la política. Así mismo la guerra y la paz comienzan a difuminar sus fronteras (Kaldor 2012) y los actores pasan a conformar redes cuyos objetivos dejan de ser ideológicos o geopolíticos y como métodos del conflicto utilizan, aparte de la violencia, la política, la economía y el control de la población mediante el ejercicio del poder sobre el territorio.

En estos nuevos modelos de guerra el poder de los Estados disminuye pues necesita subdividir sus campos de acción para intentar abarcar cada una de las nuevas aristas que presuponen las nuevas guerras o interactuar con los nuevos actores emergentes, y muchas veces el aparato gubernamental se convierte en el “Leviatán ausente” (Goodhand 2008). Esto se exagera cuando su influencia se encuentra mermada por un territorio cuya característica principal es la de ser un espacio anárquico sobre el que el Estado no tiene mayor capacidad de control ni acción y deja libre la participación de los actores que intervienen allí directamente, en un proceso de autoayuda e interdependencia. Bajo el lente de la teoría constructivista de Wendt en su debate sobre el problema de agencia y estructura, esto involucra subniveles de intervención de los actores a los que equipara con el nivel ontológico de la estructura. Es decir, las comunidades que se involucran en los sistemas de frontera a través del comercio también toman parte de las dinámicas de las nuevas guerras, a partir de su nivel de influencia sobre la estructura de las fronteras. Wendt concibe a todos los agentes directamente interrelacionados con la estructura con la que son mutuamente constitutivos, por lo que están inmersos a la par en las problemáticas que atraviesan (Wendt 1992).

Las dinámicas del capitalismo, la globalización y el mercado en las que está inmersa la frontera colombo ecuatoriana involucran actores de grupos armados estatales y no estatales cuyos niveles de agencia traspasan la línea limítrofe y generan cambios en la estructura transnacional. Esto exige que las investigaciones sobre las dinámicas de comercio inserten a la criminalidad como parte activa de la economía política internacional y no como un ente marginal al que hay que estudiar desde un apartado teórico por tratarse de un sistema que no respeta las lógicas formales de negociación lícita. Implica también eliminar el velo moral

sobre la criminalidad para dar cuenta de forma más objetiva acerca de cómo se interrelaciona el crimen con la vida cotidiana de las comunidades transfronterizas colombo ecuatorianas.

La globalización también ha alcanzado las esferas ilegales. Así como el comercio ya no se puede concebir únicamente desde lo nacional, la economía del crimen ha aprendido a adaptarse a los flujos transnacionales de capital quizás hasta de mejor manera que las economías formales. Más aún cuando el control territorial escapa de las manos del Estado y el poder se ejerce mediante el uso de la fuerza, lo que acarrea múltiples cambios en las comunidades que habitan esos espacios. Mark Duffield señala que las fronteras del poder económico y político están cambiando. En particular, la globalización ha desestabilizado las nociones territoriales del Estado. Las ideas de una economía “nacional”, por ejemplo, limitada dentro del territorio dado de un gobierno particular, ahora han caído en desuso en el Norte. De hecho, los conceptos de nuevo regionalismo y nueva política pública los ha reemplazado (Duffield 2001).

El nuevo sistema económico global se teje a través de la frontera como una red nodal cuyos puntos de unión son complejos y se componen por actores de diversa índole: legales, ilegales, civiles, militares, políticos, religiosos, organismos internacionales, bolsas de valores, empresas grandes, medianas y pequeñas, públicas y privadas, redes de empleo, productores, consumidores, proveedores de insumos y servicios, autoridades y líderes comunitarios, componentes de los sistemas de salud, educación, etc. Se conforma una red cuya imbricación es tan compleja que se tiende como un manto sobre todo el espectro social de las comunidades donde participa y sus niveles de agencia crecen en función del nivel de su propia participación dentro del sistema económico y “su funcionamiento modifica los procesos de poder, producción, experiencia y cultura” (Duffield 2001, 146). Entonces, su ejercicio exige nuevos elementos de comprensión e intervención en términos de política pública y seguridad, sin perder de vista que son los habitantes locales quienes se involucran con mucha más cercanía al punto central de origen de estas redes globales.

La economía informal se reinventó como una reafirmación de la solidaridad social y la iniciativa económica popular frente a las prácticas estatales restrictivas. Fue parte de la revuelta de los pobres contra las modalidades del subdesarrollo [...]. El comerciante informal

se convirtió en una expresión viviente del hombre económico omnipresente del liberalismo y, por lo tanto, una fuerza genuina para la modernización (Duffield 2001). Dichas redes exigen una nueva mirada acerca del ejercicio del poder y la convivencia en tales territorios donde es necesario un sistema de “gobernanza complementaria” (Idler y Forest 2015). Idler y Forest plantean la necesidad de “superar la suposición ampliamente aceptada de que solo se debe permitir que un gobierno proporcione bienes públicos, ya que esto representa cualquier autoridad política por parte de actores no estatales como mala, amenazante y algo que debe detenerse” (Idler y Forest 2015).

Los autores avanzan un paso más y argumentan que ante la ausencia del Estado los actores de la economía informal pueden establecer alianzas estratégicas para el cumplimiento del derecho fundamental a ganarse la vida, aún si dichas alianzas escapan a la normativa tradicional de los Estados o si de ellas participan actores considerados como amenazas para el sistema de control formal, lo que produce un efecto cíclico dentro del sistema social en el que participa la economía informal pues implica el fortalecimiento del sistema de poder ejercido por los actores informales que, a vista de los habitantes de las localidades, se presentan como autoridades implícitas cuyos intereses agrupan también los de la comunidad. Esto no solamente socava la presencia del Estado sino más aún su autoridad nacional e internacional. Además, incluye a los habitantes locales en las prácticas informales pues las perciben como beneficiosas para sus intereses particulares y comunitarios. Allí nace la gobernanza complementaria y no es necesariamente perniciosa (Idler y Forest 2015).

Estas ideas alimentan una noción amplia acerca del conflicto armado colombiano en las zonas transfronterizas que unen a Ecuador y Colombia por su borde andino, pues el sistema de gobernanza que allí se vive, en especial en la localidad de El Chical, implica la necesidad de una complementariedad de todos sus actores, incluso del Estado, dada su complejidad territorial atravesada por zonas de cultivo de plantas ilícitas y materias primas para el procesamiento de drogas, laboratorios de producción de las mismas, rutas de acceso terrestres, aéreas o fluviales, sistemas de comercio híbrido en los que las normativas macroeconómicas estatales se ven atravesadas por dinámicas de flujo irregular de mercancías ilícitas y la convivencia pacífica de todos los actores involucrados en este complejo sistema de redes que cohabita un territorio de paz y conflicto. Estos elementos son fundamentales para entender los

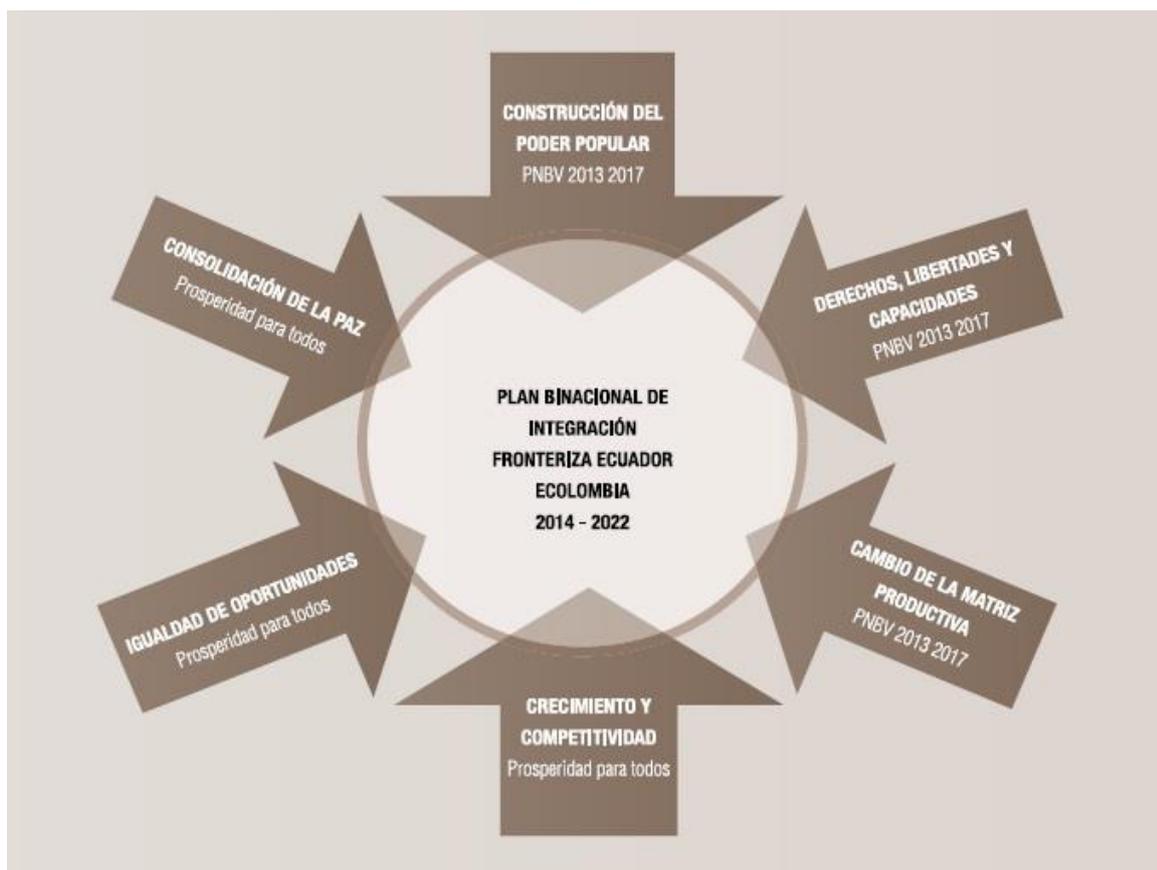
cambios en las dinámicas entre grupos armados en Nariño luego de la firma de la paz en 2016 y cómo cambiaron o se mantuvieron las dinámicas económicas en el poblado ecuatoriano El Chical luego de la firma del acuerdo, que conjuntamente constituyen el objetivo central de esta investigación.

1.2. Interacciones entre actores armados en áreas fronterizas

La literatura sobre áreas fronterizas (*borderlands*) ha hecho hincapié en la multiplicidad de actores ilegales que suelen operar en estas zonas. Las fronteras constituyen un área con un particular sistema económico y social. Si bien estas representan el límite entre dos naciones, también reflejan las condiciones y dinamismo que en estas se establecen a causa de políticas binacionales como de otros actores que hacen vida a lo largo de la zona limítrofe. Guerrero (2018, 143), desde el contexto económico, indica que la frontera puede plantearse como un dispositivo de poder, el cual centra su funcionamiento a través de la seguridad y la lógica asociada al mercado mundial. Otros autores como Aedo (2017, 95) destacan del espacio fronterizo como un territorio que se encuentra atravesado por límites económicos, políticos, sociales e incluso morales.

Las áreas fronterizas, a pesar de estar atravesadas por una delimitación que desde la comprensión de los Estados debería ser estática, pero no lo es; dejan de ser espacios separados ya que esto puede ser revertido o sufrir transformación por la misma población que coexiste en esta, es decir, la permeabilidad de los límites y las interacciones sociales que ocurren en ellas atraviesan sin problemas las demarcaciones limítrofes. Las fronteras no son inquebrantables. La dinámica de la colectividad y demás actividades que se desarrollan en este espacio hacen que incluso las funciones de los Estados se vean limitadas si estas se conciben de forma unilateral. Por lo tanto, la gestión de estas áreas por lo general es manejada a través de acuerdos binacionales que, desde 2014, han sido enmarcados dentro del Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador Colombia 2014-2022 (Senplades - DNP - PFP 2014), mediante el cual se han desarrollado gabinetes multisectoriales anuales entre las carteras de Estado de ambos países y se han direccionado fondos económicos bipartitos orientados al desarrollo local de las comunidades fronterizas, cuyos ejes de articulación se representan en la figura 1.1.

Figura 1. 1. Ejes y pilares del Plan Binacional de Integración Fronteriza



Fuente: (Senplades - DNP - PFP 2014, 31)

Los Estados buscan establecer su control y poder en la zona limítrofe correspondiente. Para ello se apoyan en estrategias de gestión e intervención militar en sectores específicos del área fronteriza. Sin embargo, como lo indica Peña et al. (2019, 780), la pérdida de la institucionalidad, la ingobernabilidad y otras fuentes de conflictividad originan perturbación en el desarrollo social y económico de la población civil fronteriza. Además, debido a esta situación emergen organizaciones delictivas manejadas desde una dinámica económica ilegal de la que participan negocios como el comercio ilegal de armas, el narcotráfico, el tráfico de personas, la venta de precursores químicos para la elaboración de estupefacientes o explosivos, etc. Esto conlleva a que la frontera pase a ser un área cuyo dinamismo se ve marcado por las interacciones entre grupos armados que muchas veces se vuelven hostiles.

La debilidad de las instituciones del Estado en las zonas fronterizas hace que los grupos armados que operan ahí tengan mayor campo de acción e impunidad. De igual manera, las

acciones del crimen organizado presentan mutación y crecimiento, perfeccionando su forma de intervenir y estrategias de despliegue (Rivera y Bravo 2020, 15). Además de las acciones antes descritas, se establecen en las zonas fronterizas esquemas de relación entre los distintos grupos armados, los cuales van enfocados en lograr específicos intereses. Estos pueden considerar la cooperación o coordinación, la competencia y, en los casos más severos, el conflicto (Idler 2012, 67).

No obstante, para la población civil que hace vida en la zona fronteriza cualquier vínculo o rivalidad entre actores armados es sinónimo de afectación, riesgo y perturbación a la paz. En otras palabras, los nexos entre los grupos armados están afectados por el nivel de confianza que puedan establecerse entre ellos. Las dinámicas entre actores armados y entre actores armados y población civil en la frontera colombo ecuatoriana evolucionaron con la firma de la paz en 2016. Se distinguen dos etapas significativas: la primera relacionada con el periodo en el que las FARC tenían presencia activa como grupo armado en la zona y la segunda luego de que se firmó el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano (Mouly, Idler y Garrido 2019, 180). A continuación, se revisa la literatura sobre las interacciones entre actores armados en la zona fronteriza en ambos periodos.

1.2.1. Interacciones entre actores armados y relaciones de poder antes de la firma del acuerdo de paz de 2016

En este apartado, se revisa la literatura académica sobre las interacciones entre actores armados antes de la firma del acuerdo de paz de 2016 con énfasis en la frontera colombo ecuatoriana. Para empezar, es necesario entender el desarrollo del conflicto armado colombiano al menos desde la década de 1980. Desde ese periodo, el conflicto armado colombiano ha conocido una cantidad incalculable de violencia y muertes, desapariciones forzadas, migración, secuestro y chantaje. De hecho, a fines de la década de 1990 y principios de la última década, fue la única vez que el país fue considerado como un "Estado fallido". En otras palabras, el Estado no ha podido garantizar la seguridad en varias partes de su territorio, aplicar la ley y ofrecer protección y servicios a los ciudadanos (Ríos 2017, 600).

De igual manera, Ríos (2016, 101) refiere que el conflicto armado colombiano ha incidido en la frontera colombo ecuatoriana. Si bien este emergió a raíz de cuestiones estructurales, como la divergencia de grupos en torno al esquema inequitativo de repartición de las tierras o la exclusión de ciertos grupos de los espacios de participación política, muchos actores paulatinamente adoptaron la lucha armada y empezaron a emplear la violencia como *modus vivendi* (Ríos 2016, 101).

De ahí surgieron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas dos organizaciones pasaron a ser a lo largo del conflicto colombiano las dos guerrillas más grandes (Ríos 2017, 60). Las FARC y el ELN se fundaron en el año de 1964. Sus acciones se intensificaron con la incorporación de dinero del narcotráfico en los años 80, lo que les permitió modernizar sus armas e incrementar sus frentes. Solo las FARC para el año 1975 tenían 15 frentes armados y 24 para el año de 1982, llegando posteriormente a 48 (Conde y Orbe 2020, 19). Por su parte, el ELN también tuvo una expansión, aunque menor a la de las FARC. La categorización y tendencia de las actividades de cada grupo está muy relacionadas con la causa que estos defienden. El ELN se caracteriza como un grupo político armado conformado inicialmente por individuos intelectuales que recibieron formación en Cuba, mientras que las FARC se definía como una guerrilla armada cuyo fin era establecer un Estado comunista (Conde y Orbe 2020, 20).

Con relación a la forma de interacción y actuación de estos grupos en el espacio colombiano, García y Fernando (2021) exponen que, en el caso de las FARC, tuvieron el alcance en diversos territorios fronterizos de desempeñar funciones que de forma clásica corresponderían al Estado. Esto les permitió disponer de espacios que le facilitarían la obtención de recursos provenientes tanto de actividades lícitas como ilícitas. Este grupo incluso pasó a ser un ente encargado de establecer condiciones económicas y políticas en sus áreas de influencia (García y Fernando 2021).

El mayor predominio fronterizo siempre lo tuvieron las FARC en relación al ELN, en especial en cuanto a espacio de accionar militar y control social en la frontera colombo ecuatoriana. Mientras tanto, el ELN ha tenido mayor incidencia en partes de la frontera con Venezuela, en los departamentos Norte de Santander y Arauca, haciéndose su presencia cada vez más

extensa con el surgimiento de los frentes armados Efraín Pabón y Cacua Guerrero (García y Trejos 2021, 105). La dinámica entre estos dos grupos armados se puede explicar considerando la transformación que tuvieron a partir de la narcotización de las guerrillas. Tan solo en el año 2015 se presentaron 122 acciones guerrilleras que estaban influenciadas por la lucha por el control territorial y dominio sobre las actividades asociadas con el narcotráfico. Estos grupos armados se concentraron en zonas específicas: el ELN hacia el nororiente de Colombia y las FARC en el centro y sur de Colombia (Ríos 2016, 90).

La extorsión y el secuestro constituyeron actividades delictivas de estos grupos en el periodo anterior a la firma de la paz en 2016 y se hicieron presentes en especial en las zonas fronterizas. Además, la conformación de laboratorios bajo su protección llegó a ser un flagelo significativo. Solo entre los años 2002 y 2010 se destruyeron 20.062 laboratorios cocaleros en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, ubicados al suroccidente de Colombia (Ríos 2016). A continuación, se examina lo que ha sucedido con la firma del acuerdo de paz de 2016.

1.2.2. Interacciones entre actores armados y relaciones de poder post firma del acuerdo de paz de 2016

El 26 de septiembre de 2016, se dio un evento histórico para Colombia tras más de 50 años de lucha armada entre el Gobierno y las FARC: se firmó el acuerdo de paz entre este grupo armado no estatal y el Estado colombiano, con la finalidad de poner fin al conflicto armado. Este proceso incluyó una estrategia diferente a los procesos de desarme anteriores que tenían una dinámica más individual. Las FARC efectivamente abogaron por una reincorporación colectiva con proyectos orientados a impulsar propuestas productivas y se transformaron en un partido político (Ríos 2017).

En lo relativo a la reincorporación social y económica se puede apreciar en el acuerdo la marcada impronta comunitaria que las FARC confirieron al proceso de negociación. Se pone de manifiesto hasta qué punto la reincorporación iba a ser un reto en los escenarios que anteriormente fueron de guerra y se evidencia la prioridad que se da a la desmovilización, a la

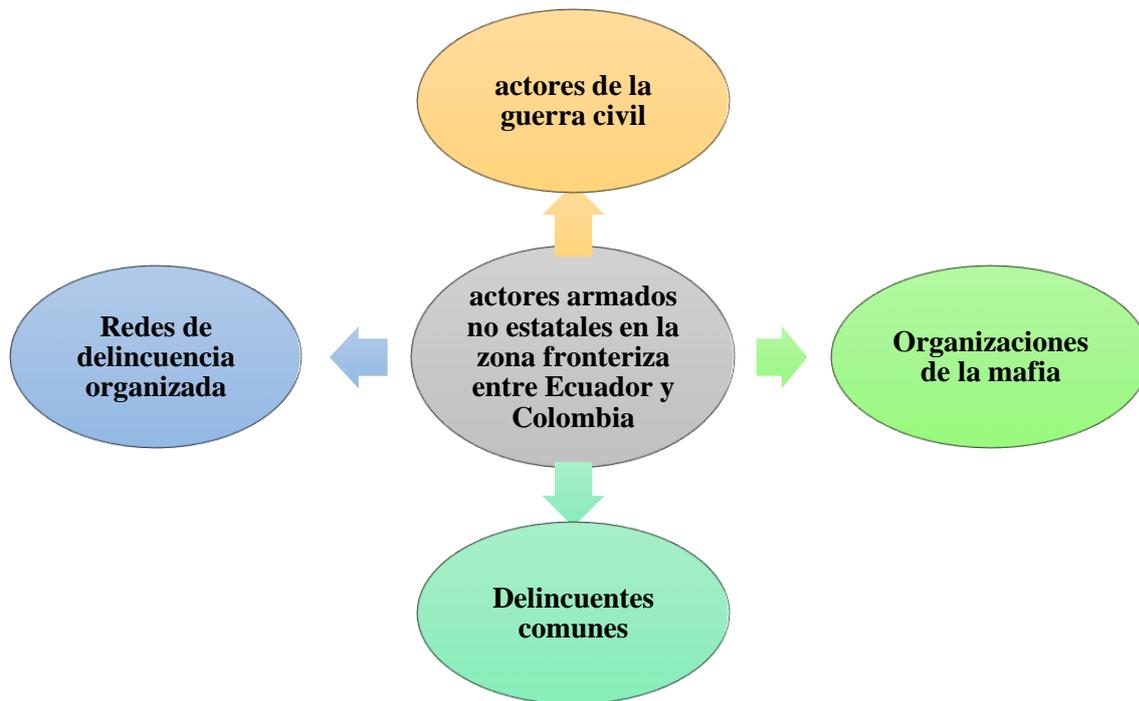
reincorporación colectiva y a la promoción de mecanismos de inserción económica y laboral cooperativos y solidarios con marcada impronta rural (Ríos 2017, 596).

Idler (2012) expone de forma precisa la aparición de diversos grupos de actores violentos no estatales (VNSA, por sus siglas en inglés) en Colombia, en especial los que han operado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Estos tienen la característica de que sus actividades económicas entran en el campo de lo ilícito, por lo general asociada al narcotráfico. Las organizaciones criminales, como el caso de los carteles de las drogas, tienen amplia repercusión sobre estos grupos o simplemente son parte de ellos (Idler 2012).

El acuerdo de paz de 2016 llevó a una batalla silenciosa pero no tan sutil en el Congreso y dentro de la sociedad. Para el proyecto de desarrollo a largo plazo del entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos, era fundamental poner fin al conflicto armado y atacar la pobreza. Esto incluyó estrategias para generar ingresos dentro del mercado formal y brindar oportunidades de educación y capacitación (Chagas 2018, 130).

Con la desmovilización de las FARC emergieron actores violentos no estatales en búsqueda de controlar espacios. Estos grupos pueden ser variados y las relaciones entre sí son diversas. Algunos pueden englobar competencias y conflictos por un determinado sector, mientras que otros pueden asociarse con fines comunes (Idler 2019). Idler (2012) menciona cuatro grupos destacados en el periodo post acuerdo de paz, los cuales se sintetizan en la figura 1.2.

Figura 1. 2. Principales actores violentos no estatales en la frontera colombiana en el periodo del post acuerdo



Fuente: elaborado por el autor con base en el estudio de Idler (2012)

El auge que han tenido los nuevos grupos armados ha evidenciado que hay factores que contribuyen en su consolidación. Por una parte, la escasa presencia institucional del Estado ha facilitado su accionar. También las necesidades básicas insatisfechas de la población ubicada en áreas fronterizas han generado condiciones que fueron aprovechadas por grupos ilegales para reclutar personas para sus actividades ilícitas. La salud, la educación e incluso la seguridad en general han sido deficientes, creándose una cultura particular que prevalece por encima de lo que debería ser el actuar de la sociedad en el marco de las políticas y leyes del país; es decir, surgieron reglas propias y el avance de grupos no legales (Mouly, Idler y Garrido 2019).

En Colombia se han desarrollado varias políticas antidroga, pero el fracaso de estas políticas ha sido evidente y ha traído consecuencias negativas para las fronteras y, por el contrario, las organizaciones criminales se han asociado o formado alianzas entre ellas que facilitan la conformación de una estructura de crimen organizado más sólida y con mayor alcance (Ceballos y Ardila 2015, 522). Algunos grupos armados no estatales han tenido mayor

participación en el fenómeno del narcotráfico en el periodo cercano al acuerdo de paz y posterior a la firma de dicho acuerdo. Entre ellos se mencionan el ELN, la disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) conocida como “los Pelusos”, el Clan del Golfo y sus disidentes, así como Los Rastrojos (García y Trejos 2021, 94). Como lo indican García y Trejos (2021), estos grupos son disidentes que no quisieron apegarse al acuerdo de paz y quedaron operando en la región apoderándose de las zonas fronterizas de sus países vecinos, entre ellos Ecuador.

El conflicto o la guerra por el control territorial entre actores armados no estatales originó incluso una migración masiva de la población indígena colombiana hacia el Ecuador luego de la firma de la paz en 2016 (González 2018). Se presentó en cuanto a la lucha entre actores armados que buscaban recuperar el control territorial en áreas antes dominadas por las FARC. Esta es una dinámica en la que los subsistemas de violencia y conflicto tradicionales buscan coexistir o pelear con los mutados o nuevos grupos armados. Así, en el departamento de Nariño, en el periodo inmediatamente posterior a la firma de la paz en 2016, se presentaron disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN por la búsqueda del control de la zona, con respecto al manejo de las actividades de narcotráfico (González 2018).

La situación de conflicto armado en la frontera colombo ecuatoriana durante el periodo posacuerdo se ha caracterizado por enfrentamientos entre grupos delincuenciales e irregulares armados que operan en la frontera estos y tienen actividades en las zonas cercanas a las parroquias de El Chical, Mataje, Santa Rosa de Yanamuro, El Carmelo y Rumichaca, a lo largo de la frontera norte.

La investigación de Conde y Orbe (2020, 18) pone en evidencia la existencia de otros grupos aparte de los ya conocidos, lo que genera un intrincado sistema de lucha entre grupos armados por el control territorial que tiene impactos en la población civil de las áreas fronterizas. Además, no todos los integrantes de las FARC acataron el acuerdo de paz. Algunos no se acogieron a dicho acuerdo, por lo que con el pasar del tiempo se integraron a distintos grupos armados o conformaron grupos armados disidentes que desarrollaron acciones para lograr posicionarse en los negocios ilícitos nuevamente (Conde y Orbe 2020).

El grupo Gentil Duarte, que se desprendió del Frente 1 de las FARC, es un ejemplo de estos grupos disidentes. Sus integrantes se separaron de las FARC al no sentirse representados en las negociaciones de paz que se llevaban a cabo en La Habana. La posibilidad de explotar recursos minerales de forma ilegal y a bajos costos, así como el cultivo ilícito de cocaína y marihuana han favorecido la aparición de nuevos grupos armados al proveer el financiamiento para sus acciones armadas. Otros factores tienen que ver con el proceso generacional que viven los grupos armados, en los cuales existe desacuerdos y competencias entre ellos (Conde y Orbe 2020, 19)

De forma particular, en la provincia de Carchi y específicamente en El Chical se han presentado eventos que ponen de manifiesto la lucha entre grupos armados no estatales por el control territorial en esta zona fronteriza. Según el diario El Comercio (2018, 1) el 13 de febrero de 2018 se produjo un enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC motivado por el control del territorio., que afectó a cerca de 85 habitantes de Tallambí y provocó su migración forzada hacia el Ecuador. (El Comercio 2018).

En el corredor interandino que bordea la parroquia continuaron las actividades irregulares como el tráfico de pertrechos militares, armas, municiones e incluso alimentos y medicinas, las cuales son para el abastecimiento de los grupos armados. Estas se realizan a través de unos 30 pasos fronterizos ilegales, los cuales constituyen zonas de soporte para las actividades delictivas de estos grupos (El Universo 2019, 1).

1.2.3. Modos de interacción entre grupos irregulares que operan en las fronteras

Este apartado busca examinar los diferentes modos de interacción entre grupos armados no estatales que se han identificado en la literatura académica relativa a las zonas fronterizas. Los grupos irregulares que operan en las fronteras se enfrentan o coexisten bajo ciertos modelos de relación. Algunos, como lo indican García y Fernando (2021), constituyen pactos de no agresión cuya estabilidad es frágil y depende de la confianza entre los actores violentos no estatales. Annette Idler señala la importancia de que ninguno de estos actores rompa las reglas del juego para que los pactos se mantengan. Si esto llega a suceder los pactos pueden

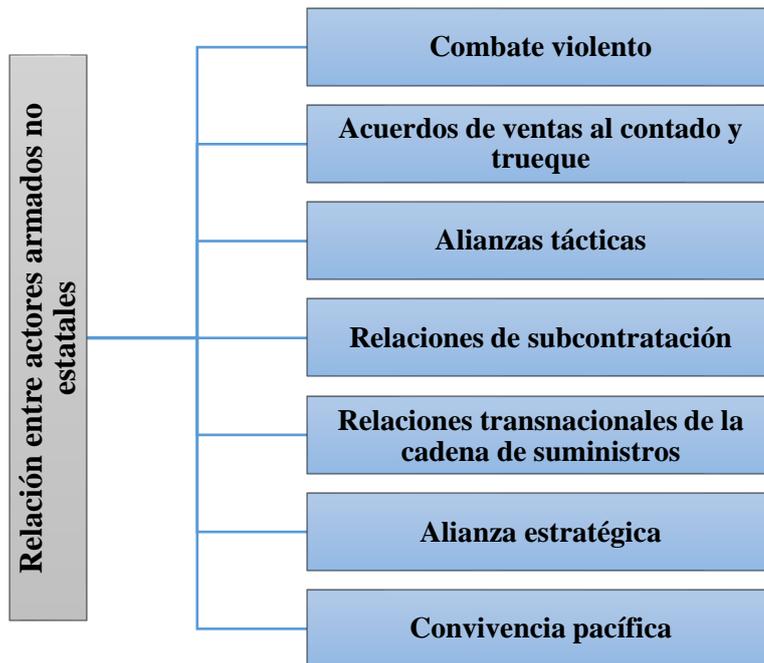
romperse y generar nuevas alianzas con otros actores. (Idler 2012, 69). Annette Idler lo explica con ejemplos:

Primero, los acuerdos entre grupos aumentan los beneficios mutuos al maximizar las ventajas comparativas. En el caso de las relaciones de la cadena de suministro transaccional, cada eslabón de la cadena es diferente. En la mayoría de las áreas de Nariño, Putumayo y Norte de Santander, las FARC controlan los cultivos de coca y están a cargo de la primera fase de procesamiento. Un ejemplo es que están históricamente arraigadas en las áreas rurales de Putumayo, donde reciben el apoyo de la población local. Los grupos post-desmovilizados se concentran en áreas urbanas y tienen vínculos más estrechos con organizaciones de tráfico de otros países, por ejemplo, el Cartel de Sinaloa mexicano o los Zetas. Por lo tanto, este análisis sugiere que algunos grupos establecen una cierta división del trabajo dentro de la cadena de suministro de drogas ilegales en lugar de controlar todo a la vez. Otro factor que parece ser fundamental para la toma de decisiones de las VNSA es la distribución del riesgo. En este sentido, las relaciones de subcontratación son casos puntuales. Los homicidios por contrato minimizan considerablemente el riesgo de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se conecten con delitos específicos. El autor inmediato a menudo es contratado por un intermediario que trabaja para otra persona, por lo tanto, el autor intelectual de un homicidio contratado es difícil de determinar. Los actores violentos no estatales recurren a tales acuerdos para que sus delitos permanezcan en la impunidad y, además, los costos de inversión no son muy altos. Por ejemplo, en la provincia costera ecuatoriana de Esmeraldas, que limita con el Nariño colombiano, los asesinos no pueden ser contratados por más de veinte dólares estadounidenses (Idler 2012, 78).¹

Idler (2012) distingue siete formas de interacción entre grupos armados, a las que se agrega la lucha por el control territorial, cuando estos esquemas de relación no son efectivos (ver figura 1.3).

¹ Todas las traducciones de citas textuales del inglés al español son propias.

Figura 1. 3. Principales esquemas de relación entre actores armados no estatales



Fuente: adaptado con base en el estudio de Idler (2012)

A continuación, se examina cada uno de estos modos en mayor profundidad:

- a) **El combate violento:** en sí no es un modelo de relación propiamente dicho; es la condición emergente cuando fallan los pactos o esquemas de coexistencia que adoptan los grupos armados en la frontera para relacionarse entre sí.
- b) **Acuerdos de ventas al contado y trueque:** este modo se caracteriza por disponer una institucionalidad y estabilidad mínima, además de requerir un grado de confianza entre las partes. Las ventas al contado o trueques por lo general involucran productos como armas o drogas ilegales. El trueque puede abarcar el intercambio de drogas por armas y viceversa. Estos vínculos suelen ser efímeros. Mientras en un determinado periodo los líderes de distintos grupos armados pueden coordinar y pactar las transacciones, es muy probable que posteriormente estos grupos vuelvan a la confrontación armada.
- c) **Alianzas tácticas:** con respecto a este esquema, Idler (2012) expone que la confianza entre las partes involucradas por lo general es baja, por lo que este tipo de pacto suele

tener una durabilidad corta. Estos acuerdos buscan beneficios a corto plazo.

Constituyen un proceso de colaboración de forma temporal que se establece entre los distintos grupos involucrados en dicho acuerdo. Un ejemplo de alianza táctica puede ser el intercambio de información con el fin de eludir las medidas o acciones de las fuerzas de seguridad estatales en la frontera. También se puede acordar la compra de armas y municiones entre los mismos o simplemente el empleo de las mismas rutas para el transporte de drogas.

- d) **Relaciones de subcontratación:** este tipo de nexos está sustentado por un nivel de confianza bajo entre las partes, pero mayor que el que se presenta con otros modelos de relación como las alianzas tácticas o acuerdos de ventas al contado y trueque, ya que para que este se dé deben haberse efectuado acuerdos preliminares. La relación de subcontratación se da cuando una de las partes realiza un requerimiento para la otra con el fin de que esta última le brinde cierto tipo de servicios a cambio. Estos pueden ser de corta duración, como por ejemplo la ejecución de un asesinato o de mayor tiempo como la provisión de seguridad en el área donde estos grupos operan.

- e) **Relaciones transaccionales de la cadena de suministro:** este tipo de vínculos involucra un respeto por las actividades y zonas de influencia de cada grupo armado, lo cual de cierto modo genera una segmentación de territorios, cada uno controlado por un actor armado. Básicamente la competencia entre cada uno de los grupos irregulares o armados está presente, pero ésta suele desarrollarse cierto tipo de compromiso entre los grupos involucrados, debido a la conexión que se da a través de las transacciones materiales o financieras que desarrollan. La segmentación del territorio se ve reflejada en la división de las actividades que desarrolla cada grupo. Un ejemplo de este tipo de vínculo se da cuando un grupo protege el cultivo de drogas, mientras que otro lo compra para luego suministrar a uno que finalmente procesará y comercializará la droga.

- f) **Alianzas estratégicas:** a diferencia de otro tipo de acuerdos de convivencia, las alianzas estratégicas son compromisos más estables en entre los actores violentos no estatales, basados en relaciones más institucionalizadas y con un nivel elevado de confianza. Este tipo de nexo puede abarcar el establecimiento de pactos para luchar de

forma conjunta contra un tercero, compartir gastos e ingresos de una determinada actividad ilícita o compartir información de inteligencia. Se han dado entre grupos insurgentes, por ejemplo, para luchar contra las fuerzas de seguridad estatales.

- g) Convivencia pacífica:** es un tipo de acuerdo de coexistencia estable y de largo plazo. Por lo general se basan en niveles elevados de confianza que las partes respetan. No tienen injerencia en las actividades del otro ni lo agreden. En esta modalidad de convivencia se comparte el territorio, se respetan los límites de cada zona e incluso los grupos pueden operar de forma paralela. Para los grupos ilegales, este tipo de acuerdo resulta beneficioso debido a que se reducen las pérdidas y riesgos. No obstante, siempre existe un nivel de incertidumbre en caso de que una de las partes rompa el acuerdo (Idler 2012).

1.3. Impacto de la firma del acuerdo de paz en las dinámicas del conflicto armado

Las actividades de grupos armados que surgieron luego de la firma de paz con la FARC han ocasionado la existencia de acciones delictivas en la zona fronteriza del Carchi, así como otras aledañas. España y Marcos (2018, 2) indican que algunos combatientes de las FARC no participaron en el proceso de paz y siguieron involucrados en el comercio ilegal de coca, cannabis y madera para exportación a través de Ecuador. Esta situación ha generado algunos incidentes que los autores mencionan:

- a) El Ecuador ha sufrido la muerte de algunos soldados, mientras otros resultaron heridos y varios civiles fueron secuestrados. En particular, en menos de tres meses, la expansión de los actores armados durante la posguerra provocó medio centenar de soldados heridos y la muerte de cuatro de ellos (España y Marcos 2018, 3).
- b) La fragilidad estatal en zonas periféricas, como las áreas fronterizas, ha facilitado el surgimiento de economías extractivas, así como el comercio ilegal y grupos privados con intereses particulares. Esta debilidad en los Estados también ha permitido que los grupos armados establezcan una forma de control social a través de la violencia (España y Marcos 2018, 3).

- c) La marginación histórica de la zona fronteriza se ha acentuado con la firma de la paz y ha permitido que en las áreas fronterizas se encuentren dos sistemas de seguridad y justicia nacionales. Esos espacios han sido utilizados como un factor de atracción para los mercados ilegales, que facilita la operación de grupos armados no estatales y la victimización. Es por esta razón que en muchos casos ha exacerbado la problemática y facilitado las condiciones para que el acceso a ciertos beneficios se dé a través de actividades ilícitas (España y Marcos 2018, 4).

- d) La dinámica transnacional de las actividades ilícitas ha ocasionado la mutación y migración de las acciones delictivas, dificultando su seguimiento y erradicación (España y Marcos 2018, 5).

Los factores antes expuestos son parte de las causas que han ocasionado la continua presencia de grupos armados en la zona fronteriza del Carchi y la ejecución de acciones delictivas como las que se expusieron. En el caso de Ecuador, sus zonas fronterizas con Colombia, específicamente las regiones de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, pasaron a ser un lugar valioso para el narcotráfico, sobre todo por tener una posición privilegiada para la actividad delictiva asociada a los estupefacientes. Incluso el impacto es tal que se detectaron en estas tres provincias ecuatorianas alrededor de 700 hectáreas cultivadas con planta de coca (Rivera y Bravo 2020).

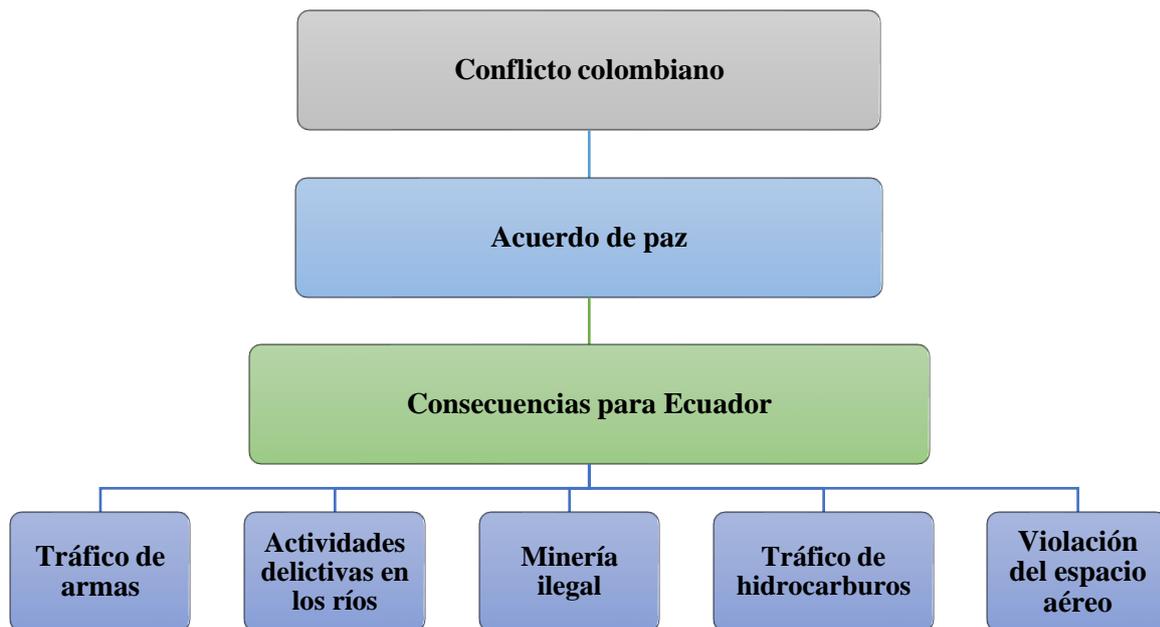
El 19 de abril de 2018 la cadena informativa BBC publicó un reportaje en el que citaba a autoridades ecuatorianas que aseguraban que el plan de desarme de las FARC incluido en el Acuerdo de Paz había significado un aumento del conflicto armado entre grupos criminales en algunas zonas del territorio colombiano cuyas consecuencias “indeseables” significaban un “daño colateral” en el que se veía afectado el Ecuador. Entre otros ejemplos la nota periodística se refiere a “la columna móvil Daniel Aldana, uno de los bloques que se acogió al desarme en 2016” (Miranda 2018, 9) cuyas disidencias habrían sido las responsables del secuestro de un equipo periodístico de una pareja ecuatoriana en 2018.

Los grupos criminales y guerrilleros tuvieron un avance progresivo en las regiones fronterizas ecuatorianas luego de la firma de la paz. El ELN expandió sus operaciones en las provincias

de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Tomó áreas que antes poseían las desmovilizadas FARC. Las actividades del ELN en el Ecuador no solo están ligadas al narcotráfico, sino también a la minería ilegal. También han estado adoctrinando personas de la zona específicamente en la Sierra Centro (Torres 2021). Las actividades del narcotráfico y de grupos como el ELN han marcado una acentuada condición de riesgo en las zonas fronterizas ecuatorianas luego de la firma de la paz en 2016 y han generado problemas sociales graves.

Por su parte el Estado ecuatoriano ante el conflicto en la frontera con Colombia ha optado por brindar un apoyo permanente a los desplazados que buscan refugiarse de las acciones violentas, los que han superado ya los 340 mil colombianos (Saint 2017). No obstante, las implicaciones de las acciones delictivas representan un impacto importante en la economía y sociedad ecuatoriana en especial de la zona fronteriza. Bedón y Salazar (2019, 59) plantean un conjunto de consecuencias que debió enfrentar el Ecuador luego de la firma de la paz a causa de la continuación del conflicto armado en el vecino país (ver figura 1.4):

Figura 1. 4 Las consecuencias del acuerdo de paz de 2016 para Ecuador



Fuente: adaptado de Bedón y Salazar (2019).

Estas consecuencias se detallan a continuación:

Tráfico de armas, explosivos y municiones: Ecuador ha tomado un rol creciente de proveedor de armas y explosivos. Los grupos delictivos aprovechan las condiciones de la zona fronteriza del lado ecuatoriano para suministrar a organizaciones criminales que realizan actividades de delincuencia común, minería ilegal y tráfico de droga. Los grupos que son responsables del aprovisionamiento están involucrados en el tráfico de explosivos, municiones y armas a través de corredores humanos, así como vehículos privados, los cuales trasladan armas artesanales, transporte de encomiendas o servicios de correos privados. Las armas por lo general provienen de Perú y Chile. Estas se acopian en las provincias de Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, para luego trasladarlas por medio de rutas marítimas o terrestres hacia la frontera norte (Bedón y Salazar 2019, 61).

Actividades delictivas en espacios acuáticos: El territorio marítimo del Ecuador es equivalente a 5.38 veces al terrestre. Este comprende 1 111 818 km² (Bedón y Salazar 2019, 69). Organizaciones criminales han aprovechado este vasto espacio para desarrollar acciones

delictivas como el narcotráfico, siendo este el de mayor preponderancia. Se dispone de reportes por parte de organismos del Estado en los que se manifiesta mayor actividad delictiva en los espacios acuáticos, principalmente en las costas de Manabí y Esmeraldas. Las redes criminales usan medios diversos para lograr transportar la droga a través de la vía marítima desde las radios boyas y embarcaciones de carga, embarcaciones de pesca industrial y de recreo, así como las artesanales. Otras estrategias involucran equipos más sofisticados como el uso de lanchas “*go-fast*” o de tecnología más avanzada como sumergibles o semi sumergibles, así como lanchas de bajo perfil (Bedón y Salazar 2019, 63).

Minería ilegal: El conflicto armado colombiano ha originado condiciones desfavorables para la actividad económica del Ecuador. La actividad extractiva de forma ilícita desde pequeña hasta gran escala lleva un esquema de explotación indiscriminado de los minerales no metálicos y metálicos, así como los relacionados con la construcción. El uso de químicos para la explotación del oro ha ocasionado impactos significativos sobre el ambiente. La minería ilegal es una actividad de gran interés para los grupos delictivos que operan en la frontera, tomando en cuenta que ésta provee elevadas ganancias. En la frontera con Colombia ésta se ha dado principalmente en las provincias de Orellana, Napo, Esmeraldas, Imbabura y Carchi. Las consecuencias de la minería ilegal no solo son relacionadas con el aprovechamiento ilícito de los recursos del país, sino que estas traen consigo otras actividades delictivas como el tráfico de explosivos, así como el avance de las áreas de influencia de organizaciones criminales, como ocurrió luego de la firma de la paz en 2016 (Bedón y Salazar 2019, 65).

Tráfico de hidrocarburos: El tráfico de hidrocarburos se acentuó en las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi. El principal producto traficado es la gasolina, la cual provee grandes ganancias a las organizaciones criminales. El combustible es adquirido en distribuidores autorizados de Ecuador. Los grupos criminales van almacenando el combustible en bodegas clandestinas, para luego trasladarlo hacia Colombia bien sea por vía marítima o terrestre (Ruíz 2015, 4). De Esmeraldas hacia Colombia el tráfico de combustible se hace predominantemente por vía marítima. El combustible traficado por lo general es empleado para surtir las embarcaciones que trafican droga y para procesar la hoja de coca. En el caso de Carchi, se comercializa ilegalmente la gasolina para surtir a vehículos, pero

también gran parte de este combustible es empleado para en el proceso de elaboración de estupefacientes (Bedón y Salazar 2019, 67).

Violación del espacio aéreo: los grupos criminales que operan en la frontera colombo ecuatoriana emplean aeronaves para el traslado de drogas. En tal sentido el espacio aéreo del Ecuador y por tanto la soberanía del país se ha visto violado por parte de estos grupos tanto por la incursión de aeronaves de bajo *performance* en la cual ingresa dinero para la compra de drogas y salida de esta (Bedón y Salazar 2019, 69).

Considerando los principales problemas, Bedón y Salazar (2019, 70) exponen en la figura 1.5 el nivel de afectación o injerencia que las actividades delictivas antes mencionadas representan para el Ecuador. En su análisis se pueden observar las amenazas al territorio nacional no son estáticas, fluctúan en función de sus actividades y niveles de interacción mutua, rebasando el espectro de las amenazas tradicionales, empujando a los organismos de respuesta del Estado a adoptar modelos de acción multidimensionales, cooperativos e interdisciplinarios, aliándose a otras instituciones y actores locales, nacionales y binacionales.

Figura 1. 5. Categorización del nivel de injerencia o impacto de las actividades ilícitas derivadas del conflicto armado en Colombia sobre el Ecuador

GRADO DE INJERENCIA	ALTO	MEDIO	BAJO		
AMENAZAS Y RIESGOS	JURISDICCIÓN TERRITORIAL				
	C.O. N° 1	C.O. N° 3	C.O. N° 2	C.O. N° 4	C.O. N° 5
	Región norte	Región Sur	Región Occidental	Región Central	Espacio Aéreo
GIA (Colombia)	ALTO	BAJO	MEDIO	MEDIO	BAJO
Org. de Narcotráfico y delitos conexos.	ALTO			MEDIO	
Org. Criminales Transnacionales	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BAJO
Terrorismo	ALTO	BAJO			
Violación al Espacio Aéreo	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO
Ataques Cibernéticos	MEDIO				
Tráfico de armas, municiones, explosivos.	ALTO				BAJO
Minería Ilegal	ALTO		BAJO	MEDIO	BAJO
Delitos en espacios acuáticos	ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	
Tráfico de hidrocarburos	ALTO		ALTO	BAJO	

Fuente: Bedón y Salazar (2019).

Capítulo 2. Geografía económica y social de la frontera en la parroquia El Chical

El presente capítulo explora los modos de vida de la frontera rural colombo ecuatoriana sobre la línea divisoria que bordea la parroquia El Chical, a fin de explicar las dinámicas locales de comercio y su inserción directa e indirecta en estructuras comerciales más amplias, las cuales pueden ser legales o ilegales, y pueden estar anexas a sistemas de interacción de actores violentos no estatales, estructuras criminales, redes transnacionales de comercio de sombra o sistemas de flujo de dinero de origen irregular. La dinámica económica de El Chical incluye conexiones directas con territorios del interior ecuatoriano como las ciudades de Esmeraldas, Tulcán, Ibarra, Otavalo o Quito, así como conexiones con los departamentos colombianos de Nariño y Tumaco. Además, a través de las redes transnacionales de flujo de economías ilícitas, puede tener conexiones con terceros países que intervienen en el comercio y distribución de drogas, armas, precursores químicos, tráfico de personas, migración irregular, entre otras.

Estas dinámicas de relacionamiento directo e indirecto condicionan poco o mucho la vida de los habitantes chicaleños en función de la aplicación de las leyes de uno u otro país. Para el análisis se ha tomado en cuenta la experiencia empírica directa del autor de la presente tesis al convivir durante tres semanas en territorio, analizando e interpretando las observaciones a la luz de la teoría. Además, se consideran las entrevistas realizadas a varios actores locales, representantes institucionales y analistas económicos y sociales.

Empieza con una presentación de las principales actividades económicas en la frontera rural andina entre Ecuador y Colombia. Luego, analiza cómo las características específicas de la parroquia de El Chical han sido propicias para las actividades económicas informales e inclusive ilegales. Posteriormente, examina la limitada presencia del Estado en la zona fronteriza andina rural entre Ecuador y Colombia. Siguen un análisis de las características productivas, laborales y comerciales de El Chical y de la relación comercial binacional entre Ecuador y Colombia en esta zona.

2.1. Economía y comercio de la frontera rural andina entre Ecuador y Colombia

Desde el punto de vista de sus características territoriales a Ecuador y Colombia los divide una frontera híbrida, cuya diversidad en términos de regiones naturales y territoriales ha dado pie a que se considere la existencia de múltiples fronteras, esto ha facilitado la comprensión de la zona tanto para su estudio desde la academia cuanto para la intervención que cada Estado hace sobre ella en función del conocimiento de la zona y las relaciones sociales que se producen allí. Carrión (2013, 34) se refiere a esto como “realidades heterogéneas” y explica que existen cuatro espacios claramente diferenciados por sus rasgos específicos:

En Sucumbíos, provincia amazónica, hay una convivencia de las fuerzas irregulares venidas del conflicto interno colombiano (narcos, guerrilla) con un mercado interno que sustenta las actividades ilícitas. En Carchi, provincia de la serranía, el tema central pasa por la existencia de un comercio ilegal (contrabando) que se funda en las condiciones económicas asimétricas de cada lado. En Esmeraldas, provincia costeña, el narcotráfico ha producido una zona de paso que requiere de actores que desbrocen el camino (sicarios, mercado ilegal) así como también problemas típicamente interétnicos. Y en el océano Pacífico tenemos un espacio para la migración irregular y el narcotráfico (Carrión 2013, 34).

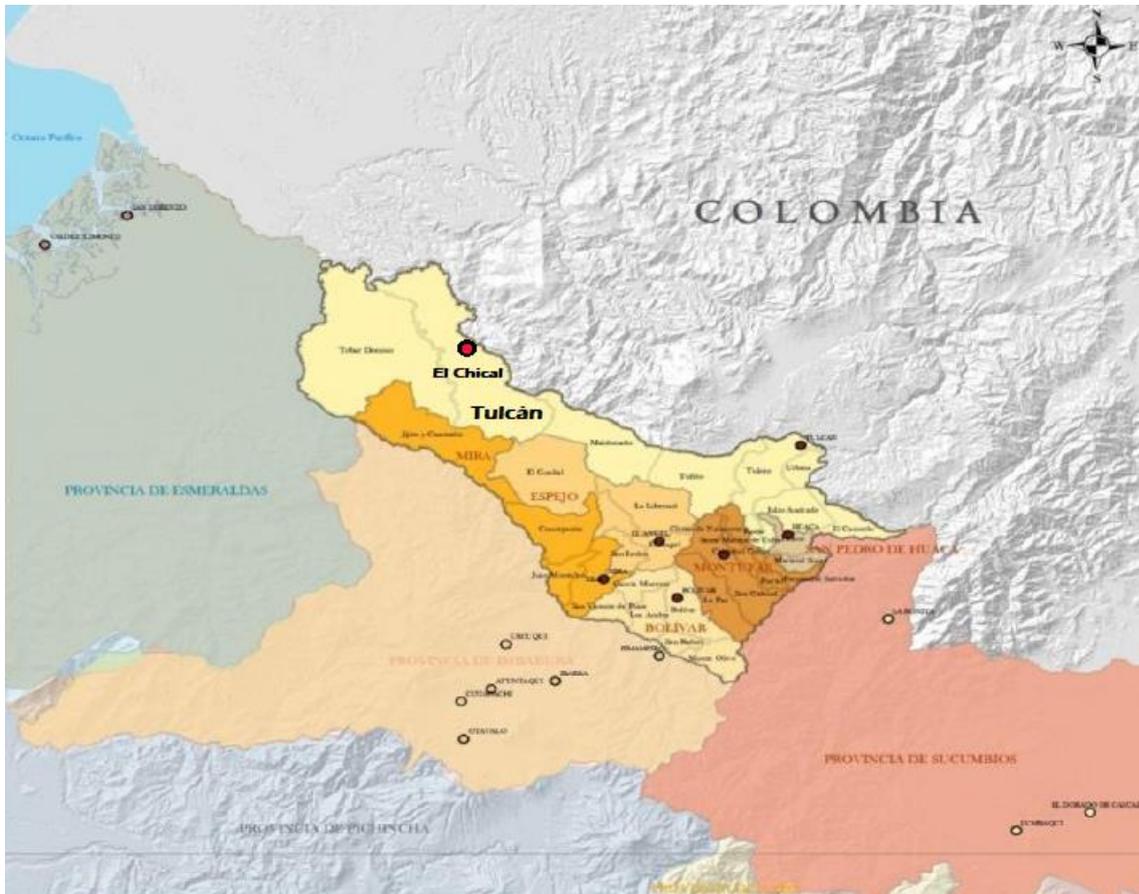
Esta diferenciación separa las dinámicas de relacionamiento y desarrollo socioeconómico llevados a cabo por personas del mismo país que habitan la frontera común en sentido longitudinal mientras que relacionan a los habitantes de uno y otro país transversalmente, es decir que las personas de la provincia Carchi tienen más relación con las personas de la zona andina de Nariño que con los habitantes de la provincia de Esmeraldas. Lo propio ocurre en la región amazónica de los dos países al igual que en la costa o el Océano Pacífico.

2.2. Características de la parroquia rural transfronteriza El Chical

En ese contexto, la zona a la que nos referimos en la presente investigación corresponde al punto de unión entre las fronteras andina y costera, específicamente los 57 kilómetros fronterizos sobre los que se asienta la parroquia ecuatoriana El Chical, colindante con la vereda colombiana Tallambí y perteneciente a la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia (ZIFEC) (ver mapa 2.1). Esta parroquia tiene una extensión territorial de 442 kilómetros cuadrados y se encuentra entre los 280 y los 2100 metros sobre el nivel del mar, en

la vertiente noroccidental del Cerro Golondrinas, lo que determina la presencia en la zona de clima sub tropical húmedo.

Mapa 2.1. Situación geográfica de la provincia del Carchi y la parroquia El Chical en la frontera entre Ecuador y Colombia



Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Provincia del Carchi 2015 – 2019 (2015, 19)

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Chical, en este territorio predomina la presencia de suelos andosoles que “presentan una baja perspectivas para un desarrollo agrícola intensivo” (GAD El Chical 2015, 5), por lo que la producción local de la parroquia no es sumamente representativa para la economía del cantón Tulcán al que pertenece, en términos de mercados tradicionales de frutas y alimentos. Pero, en cambio, la zona es altamente conocida por la abundante presencia de sembríos de coca en los alrededores selváticos, con mayor presencia en la parte colombiana que en la parte de Ecuador, pero con una cercanía de apenas metros de separación entre la comunidad ecuatoriana y los cultivos ilícitos. En conversación con el autor, el agrónomo Wilson Raza explicó que esto se da

porque los suelos andosoles “son suelos muy negros de origen volcánico que resultan de la biogradación de la ceniza y la lava, por lo que son muy porosos y en condiciones de humedad y calor, como en El Chical, se vuelven muy aprovechables para cultivo” (Conversación personal con Wilson Raza, agrónomo tulcanero, marzo de 2019). Estos suelos altamente cultivables, el clima de la zona subtropical andina y la altura del territorio determinan casi todos los factores que influyen en la vida socio económica y cultural de los chicaleños y de sus vecinos colombianos, incluyendo aspectos tan determinantes como el cultivo de plantas de coca, materia prima del narcotráfico presente en la zona (aspecto que se abordará en el siguiente capítulo).

La parroquia El Chical pertenece al cantón Tulcán, considerado como la puerta de entrada norte del Ecuador y principal punto comercial transfronterizo con la República de Colombia por vía terrestre. De los once distritos aduaneros existentes en el país, el tulcanero se encuentra en quinto lugar en cuanto a recaudaciones de impuestos por importaciones después de Guayaquil, Esmeraldas, Quito y Manta. “En el año 2011 Tulcán generó una recaudación aduanera de 174,64 millones de dólares lo que implica el 5,41% de la recaudación total del país” (GADM Tulcán 2015, 109). El Chical, sin embargo, no forma parte de esta estadística pues no se inserta de modo formal en la dinámica comercial transfronteriza. Sus principales y más grandes sistemas de encadenamiento productivo y comercial se destinan hacia el mercado de consumo interno dentro de la parroquia y hacia las zonas urbanas de Tulcán (provincia de Carchi) e Ibarra (provincia de Imbabura), mientras que a través de la frontera la relación comercial binacional de El Chical se da directamente con la vereda de Tallambí y funciona por medio del comercio de hormiga, el menudeo y la compra venta directa de productos de primera necesidad.

En la parroquia habitan oficialmente 3.437 habitantes según el censo poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizado en 2010 (INEC 2010). No obstante, de acuerdo a la Junta Parroquial de El Chical el número ha aumentado a 4.088 habitantes “pero transitan la zona alrededor de 5.900 personas que viven en las comunidades aledañas y utilizan el suelo chicaleño para trabajar” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Dichas comunidades corresponden a cinco asentamientos mestizos conformados por familias de carácter híbrido surgidas de la unión entre colonos, awás,

mestizos ecuatorianos y personas naturales de Colombia. También hay diez comunidades de la etnia awá que, de acuerdo a Nilo Ortiz, son más organizadas socialmente que las mestizas (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

Es importante mencionar que varias de estas familias habitan ambos lados de la frontera, o mantienen relaciones de parentesco en los dos países. Por ejemplo, hay familias formadas por abuelos colombianos, padre colombiano y madre colombiana e hijos ecuatorianos. Esta característica posibilita que los núcleos familiares no habiten un solo territorio nacional y el traslado de un lado a otro de la frontera se convierta en una dinámica cotidiana. Es normal el que miembros de una familia inscrita en uno de los dos países habite, trabaje o se beneficie de servicios sociales en el país de junto.

El traspaso a través del límite binacional se realiza cruzando el río San Juan (conocido en Colombia como Mayasquer) para lo cual existen alrededor de 18 pasos informales constituidos por puentes peatonales no carrozables. Nilo Ortiz describió que “entre las dos comunidades hay puentes provisionales, peatonales, costumbristas, hechos antes del tratado Pedemonte Mosquera. Hay alrededor de 18, pero para nosotros no es problema cruzarnos el río a nado llevando las cosas que tenemos en talegos” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Estos puentes permiten la cohabitación binacional del territorio y son de importancia para los habitantes, en especial para quienes de Colombia aprovechan el paso al Ecuador para comprar y vender sus productos o acceder a servicios otorgados por el Estado ecuatoriano tales como educación, salud, empleo, beneficios sociales, dada la casi nula presencia del estado colombiano en el territorio. Los puentes y los pasos carrozables han sido construidos casi en su totalidad mediante el trabajo mancomunado entre los habitantes de lado y lado de la frontera, por lo que su cuidado también es visto como una responsabilidad compartida. Según el presidente de la Junta Parroquial de El Chical,

Se ha pedido mejorar los pasos peatonales, porque hay más necesidad de comercio, pero las políticas de Estado no lo permiten. En época de (Rafael) Correa se intentó destruir los pasos, pero no lo hicieron porque la gente se puso sobre los puentes a cuidar, durmieron amarrados a los puentes, gente de Ecuador y Colombia (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

La convivencia de las dos comunidades transfronterizas se evidencia de gran forma en la cultura compartida, que se refleja principalmente en la religión y las fiestas populares, ceremonias ancestrales, aniversarios, eventos tradicionales, costumbres, gastronomía, música, vestimenta, etc. En un contexto de tal confraternidad el micro comercio es inevitable y necesario, por lo que, a lo largo de los años a partir de la colonización de la parroquia, el paso de mercadería de un lado y otro ha marcado semejanzas y diferencias identitarias entre los pobladores de Ecuador y Colombia. El sociólogo Santiago Cabrera, exjefe de Cooperación Internacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, durante una entrevista explicó que esta relación comercial tiene presencia histórica en la zona, anterior incluso a la existencia de las leyes que en la actualidad pretenden normar esta relación:

La ley te exige ciertas normativas para regularizar la circulación de mercancías a través de la frontera, pero el comercio estaba aquí antes que esas normativas, que esta lógica del intercambio comercial e incluso que las mismas vías. Lo que hoy es la Panamericana, por dónde se han trazado, cuáles son los pueblos que unen esas vías, han sido reflejo y fruto de esa dinámica comercial, si pensamos en mediados del siglo anterior, 1950 o alrededor, la comercialización del trigo desde las zonas de San Gabriel, La Paz, Bolívar (Carchi), hacia Ipiales (Colombia), hasta el punto en que Bavaria instala una planta de cerveza en Ipiales por la calidad de la cebada de esta parte del país, del Carchi. Y eso ha sido un ejemplo, el comercio ha sido como tradicional en esta zona y ha sido fuente de ingresos desde hace mucho tiempo (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

Este paraguas legal impuesto sobre la frontera contempla y regula efectivamente los pasos fronterizos para garantizar protección del Estado en cuanto a seguridad y comercio, pero aparentemente está pensado en términos realistas de separación formal de dos países, lo cual excluye las relaciones binacionales comunitarias de las pequeñas poblaciones rurales como El Chical y Tallambí. En ese vacío es más fácil que aparezcan economías de sombra que evaden o se desvían de la norma. El entrevistado dejó claro que esta situación era propicia para el desarrollo de economías informales e inclusive ilegales: “Entonces, viene esta normativa que pretende regularizar las actividades comerciales, y sin duda va a generar esta economía informal que busca otras alternativas para que esas mercancías que llevan y traen puedan

generar ingresos para su familia” (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

2.3. Presencia del Estado en la zona fronteriza andina rural entre Ecuador y Colombia

La diferencia entre la presencia que hace el Estado entre las poblaciones fronterizas de Ecuador y Colombia es muy notoria. Tallambí pertenece al corregimiento indígena Mayasquer, del municipio de Cumbal del departamento de Nariño, a decir de sus pobladores, quienes estiman que el poblado está habitado por unas 2.500 personas de las que no hay un conteo formal. En la información oficial vertida desde las instituciones de gobierno departamental y municipal no se menciona a Tallambí y el nombre aparece únicamente como punto de referencia geográfica para referirse a una quebrada que desemboca en el río Mayasquer. Sus habitantes no cuentan con luz eléctrica provista por el Estado, sino que la conducen desde Ecuador a través de cableados improvisados en mingas conjuntas con los pobladores de Ecuador. No existe red telefónica, aunque unas pocas casas cuentan con televisión satelital. En el poblado hay una iglesia y los servicios de atención en salud son llevados esporádicamente por miembros del ejército colombiano cuando este ingresa al territorio para realizar patrullajes y brigadas ambulatorias de atención prioritaria. También hacen presencia médicos, peluqueros, agentes gubernamentales locales y nacionales, así como funcionarios del Estado durante las acciones cívicas binacionales que se llevan a cabo en cumplimiento de los convenios de cooperación acordados durante los gabinetes presidenciales bilaterales anuales.

Del lado ecuatoriano en cambio sí hay presencia de instituciones del Estado. En El Chical existe el Centro de Salud Chical en el que trabajan dos médicos, tres enfermeras y dos técnicos de atención prioritaria. Durante la entrevista con el autor, el presidente de la junta parroquial, Nilo Ortiz, detalló que el centro cuenta con una ambulancia y medicamentos básicos. Hay también una unidad educativa en el centro poblado de El Chical en la que estudian 678 alumnos, 39 educadores y tres profesores de educación básica. Además, se mantiene una escuela unidocente en la comunidad El Cauchal (noroccidente de El Chical) a la que asisten 35 niños cuyos padres decidieron no acatar las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación de eliminar este tipo de escuelas, debido a la distancia entre la comunidad y el centro poblado de El Chical (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta

parroquial de El Chical, febrero de 2019). Pese a ello, el representante de los chicaleños asegura que el Estado ecuatoriano ha abandonado a la parroquia:

La infraestructura de la escuela es muy pobre y fue construida para clima frío, con techo de asbesto que, en horas de sol, dentro del aula, supera los 25 grados centígrados y no permite que los estudiantes se sientan cómodos ni que los maestros puedan enseñar adecuadamente las materias. Eso obviamente disminuye la calidad de la educación. Además, tenemos niñas y niños que deben caminar entre cuatro y seis kilómetros para llegar a clases, a pesar de que el Municipio de Tulcán gestionó el transporte escolar (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

Conforme consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborado por el municipio de Tulcán, en la parroquia existen 14 establecimientos educativos: “10 de Noviembre, Ciudad del Ángel, Eduardo Fierro, Humberto Aristizabal, Juan Bautista Aguirre, Juan Pay, Julio Zaldumbide, Manuel Burbano Rueda, Medardo Ángel Silva, Playa Grande, Quinshul, Red Educativa Hispana, Chical, Río Tronquería y Rufino Taicuz” (GADM Tulcán 2015, 70). En cambio, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El Chical se detalla la no existencia de un establecimiento educativo regular, lo que deviene en un “analfabetismo social” que impide que los estudiantes de la zona compitan con nuevos conocimientos más orientados a la tecnificación y el aprovechamiento de nuevas tecnologías. Así, según el documento, “en la parroquia se presenta el 31,37 % de analfabetos, lo que da a suponer que este problema se encuentra enraizado en los grupos de edades sobre los 50 años” (GAD El Chical 2015, 18, 19). El mismo documento señala que “el 4, 53 % de la población ha tenido acceso a educación al menos primaria; mientras que un 93 % de la población en edad escolar accede a la educación general básica (67,88%) y a educación general bachillerato (25,12%)” (GAD El Chical 2015, 18, 19). La ausencia de programas de educación que completen el ciclo escolar hasta la secundaria incide directamente en las perspectivas de futuro de los pobladores jóvenes, quienes, al no vislumbrar un porvenir prometedor desde la educación, se dedican a trabajar desde muy temprana edad en actividades mayormente vinculadas a la agricultura, ya sea como jornaleros o como ayudantes aprendices de sus propios terrenos.

La parroquia cuenta con una asignación presupuestaria anual de 400 mil dólares americanos por parte del municipio de Tulcán, así lo afirmó Nilo Ortiz en diálogo realizado durante el trabajo de campo para la presente investigación. En la charla el comunero mostró insatisfacción ante tal cifra ya que, según relató, las autoridades justifican el gasto de esos recursos a través de obras cuyos propósitos no quedan claros o no abarcan un beneficio para la totalidad de los habitantes chicaleños en sus comunidades, sino que se ejecutan apenas en los 4 kilómetros de la cabecera parroquial. Por otro lado, la prefectura provincial tiene dentro de sus competencias el mantenimiento vial de los accesos, y ha construido 4 kilómetros de carretera. El Gobierno nacional a su vez ha participado, por intervención del ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la construcción de un eje vial que conecta de aproximadamente 26 kilómetros de carretera a lo largo de la frontera y 16 kilómetros hacia el interior de El Chical, en el límite con la parroquia Jijón y Caamaño (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

La seguridad de la parroquia está a cargo de tres policías que habitan una Unidad de Policía Comunitaria de construcción ligera y cuentan con un patrullero. Estos policías articulan sus acciones al sistema de seguridad propuesto por la Junta Parroquial en el que se articulan nodos de seguridad vecinal de persona a persona en los que participan todos los habitantes. A decir del representante parroquial:

Esto ha permitido fortalecer las mesas de diálogo entre los habitantes para mediar en los conflictos y reducir los índices de violencia. Hasta 2014 recibimos una parroquia con tres muertes violentas al año y las logramos reducir a cero muertes violentas en 2015, una muerte violenta en 2016 y una muerte doméstica en 2018 por un pleito entre amigos (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

A nivel de territorio el control de seguridad lo lleva a cabo el Ejército ecuatoriano:

Tenemos un destacamento militar del que no sabemos cuántos elementos viven ahí porque así es la norma y eso está muy bien que no sepamos. Ellos resguardan la frontera a lo largo de los 57 kilómetros de línea limítrofe con Colombia en los que no ha habido un solo derramamiento de sangre. Ellos están patrullando para ver que en territorio no se incursione los cultivos

ilícitos o no sean lugares de descanso de grupos irregulares (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

Tanto Ortiz como otros pobladores interrogados durante el trabajo en campo para la presente investigación (que prefirieron no ser identificados) niegan la existencia de conflictos al interior de la parroquia o del otro lado del río fronterizo. Asimismo, niegan que en el territorio habiten personas vinculadas al conflicto alegando que “no se ha oído nada” y que allí “todo está tranquilo” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019; entrevistas a P1, P2, P3, P4 y P5, marzo de 2019).

2.4. Características productivas, laborales y comerciales de El Chical

La provincia del Carchi es predominantemente agrícola. De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Carchi, “el 30.21% del suelo carchense está siendo utilizado en producción agrícola” (GAD Carchi 2019, 8). Particularmente en la parroquia El Chical se produce naranjilla, plátano, piña, borjón, lima, caña, café y yuca, limón, papa china, maíz, caña de azúcar; la cría de ganado bovino para producción de leche y carne con sus respectivos derivados. La piscicultura es otra actividad que se ha desarrollado en la parroquia de El Chical con la producción de cachama, tilapia y carpa. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,

Existe una importante concentración de la agricultura y la ganadería dentro de las actividades desarrolladas, es así como estas representan el 69% de la economía de la zona, es decir más de las dos terceras partes de los pobladores censados se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Entre los principales cultivos se encuentran naranjilla, plátano, piña, borjón, limón, caña, café y yuca, destacándose la producción de naranjilla. Sin embargo, la producción de estos productos no es en grandes cantidades sino más bien para satisfacer un consumo local y comercializar en ciudades como Tulcán, Quito, Ibarra y Colombia, especialmente la naranjilla que es comercializada semanalmente y en cantidades importantes. La comercialización de los productos agrícolas se realiza a través de intermediarios, presentándose los mismos problemas que en otras parroquias al depender de pocos productos que son vendidos a precios bajos, incidiendo en el ingreso económico a la familia. Por otra parte, la ganadería producida en la parroquia es destinada a la producción de leche y sus derivados y también a la producción de carne. También existe piscicultura y actualmente

existen 4 hectáreas de especies como cachama, tilapia y carpa para consumo interno, cada hectárea produce dos cosechas al año. Se requiere un incremento en su producción, pues existe gran demanda en el mercado local. El desarrollo económico de Chical es generado por los flujos económicos de Colombia, el 40 a 50% de la dinámica económica de la parroquia es generado por los vecinos, pues semanalmente en las ferias invierten aproximadamente \$ 5.000 dólares (GAD El Chical 2015, 29, 30).

Tabla 2. 1. Distribución porcentual de la población de El Chical por grupo de ocupación

Grupo de ocupación (primer nivel)	Casos	%
Agricultores y trabajadores calificados	557	47,9%
Ocupaciones elementales	276	23,8%
Trabajadores de los servicios y vendedores	41	3,5%
Ocupaciones militares	29	2,5%
Oficiales, operarios y artesanos	28	2,4%
Otros grupos de ocupación	231	19,9%
Total	1,162	100,0%

Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010)

De acuerdo al documento otra importante actividad económica para la población chicaleña son los programas de economía popular y solidaria mediante los que se busca enfrentar casos críticos de extrema pobreza que se dan a lo largo de las comunidades de la parroquia, en donde aparte de la agricultura los habitantes se dedican a actividades “de muy baja productividad y casi nula competitividad” (GAD El Chical 2015, 30). En la mayoría de los casos este tipo de economías representan una importante fuente de sustento para las familias de las localidades ecuatorianas y colombianas, mismas que se apoyan en programas de fortalecimiento de las cadenas productivas impulsadas desde organismos como la Prefectura Provincial del Carchi o algunas ONG cooperantes.

Anita Morillo, directora provincial de Desarrollo Económico Local del Carchi, en entrevista con el autor dijo que se habían implementado proyectos de encadenamiento productivo focalizados a diferentes productos como por ejemplo la mora o la naranjilla. Tales programas se orientaban de acuerdo a los tipos de suelos de cultivo y los grupos familiares que deseen participar. Ellos se capacitaban en cuanto a modelos de asociatividad, recursos y garantías legales para los emprendimientos productivos. Al mismo tiempo se desarrollaban prácticas de cultivo con miras a mejorar los sistemas de siembra, riego y aprovechamiento del suelo. Instituciones como la Prefectura brindaban educación y equipamiento técnico, facilidades de acceso a créditos de desarrollo productivo, entrega de semillas seleccionadas, plantas, plántulas, insumos técnicos y tecnológicos, infraestructura y acompañamiento. Todo esto se realizaba con el apoyo de organismos no gubernamentales que fomentaban los programas mediante cooperación interorganizacional destinada en su mayoría a la asistencia humanitaria para personas en movilidad (Entrevista a Anita Morillo, directora encargada de Desarrollo Económico Local del gobierno autónomo descentralizado provincial de Carchi, marzo de 2019).

Para Morillo uno de los eventos más importantes en la dinámica comercial y la convivencia de los habitantes de El Chical y Tallambí es la feria de mercado que se realiza cada viernes, a la que llegan vendedores de las distintas comunidades de la parroquia o de parroquias aledañas, incluso de centros urbanos como Quito, Ibarra, Tulcán y veredas cercanas de Colombia. Según ella, “todos los productores o los campesinos de la zona salen agarrados sus productos y se moviliza un poco más la economía, van también a vender productos de Colombia” y agrega que este tipo de mercado “no representa grandes ganancias”, sino más bien se incrustan en un sistema económico de supervivencia (Entrevista a Anita Morillo, directora encargada de Desarrollo Económico Local del gobierno autónomo descentralizado provincial de Carchi, marzo de 2019). Allí se comercia con bienes manufacturados y artesanales tales como collares, pulseras, aretes, canastas, bolsos. Además, llegan artículos de menaje para el hogar y productos agrícolas. Todo es aprovechado por “piqueros”, que son comerciantes intermediarios encargados de llevar los productos para revenderlos en mercados más grandes de otras ciudades (Entrevista a Anita Morillo, directora encargada de Desarrollo Económico Local del gobierno autónomo descentralizado provincial de Carchi, marzo de 2019). De todo este proceso participan personas ecuatorianas y colombianas que atraviesan de

uno a otro país comprando y vendiendo en lugares como Pasto, Cumbal e Ipiales en Colombia, y Tulcán, Ibarra y Quito en Ecuador:

No se ha excluido a la gente de Colombia. Más bien, lo que queremos es fortalecer la producción y el trabajo de los agricultores. Las familias están conformadas por personas tanto ecuatorianas como colombianas. La prefectura se ha encargado de que ellas, ellos, sean capacitados, tengan un medio de productividad, que tengan ayuda productiva para vender (Entrevista a Anita Morillo, directora encargada de Desarrollo Económico Local del gobierno autónomo descentralizado provincial de Carchi, marzo de 2019).

Desde la junta parroquial Nilo Ortiz explicó que hasta 2012 acudían al territorio chicalaño organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACNUR, AlTrópico, Fondo Ecuatoriano para el Progreso de los Pueblos, HIAS y FUDELA. Todas estas instituciones se vinculaban en redes de cooperación que trabajaban bajo directrices marcadas por la Organización de Naciones Unidas a través de Unicef y ACNUR, orientadas a proteger y garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en movilidad dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Estas organizaciones estaban articuladas a un Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) del cual forman parte “43 agencias de Naciones Unidas, así como organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, entre otros” (R4V s.f.). Aun así, de acuerdo al sociólogo Santiago Cabrera, esta visión generó problemas en la intervención de las organizaciones ya que son pocos los proyectos aplicados que se encargan de incentivar la producción en la provincia. En cambio, la mayoría de ellos se destinan a trabajar sobre la crisis migratoria a través de programas de asistencia humanitaria para personas en situación de movilidad (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020). Esto en principio generó resistencias en la población local por lo que fue necesario cambiar la estrategia para incluir a dicha población en estos programas, según narró el entrevistado:

En la zona de Maldonado y Chical (...) ha sido una zona en donde la cooperación ha estado participando en algunas iniciativas formando asociatividad con los agricultores, con la iniciativa del turismo comunitario, de formación a jóvenes y mujeres especialmente, pero siempre tratando de incluir a la población migrante que ese ha sido el foco de su accionar en frontera norte. Básicamente la cooperación, diría que un 80, 90% de la cooperación está enfocada a temas de respuesta a población migrante tanto colombiana como venezolana. Entonces de a poco se ha ido cambiando esta visión de la respuesta humanitaria hacia una visión de desarrollo sostenible que incluye a la población local, y eso es lo importante porque al final si solo se da respuestas a la población en movilidad humana, vas generando resistencias en la población local (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

En este marco la influencia de los flujos migratorios externos sobre la economía de El Chical no es considerable, en primer lugar, por la geografía del terreno de acceso a las comunidades de la parroquia, que no son del todo favorables para asentamientos humanos ni ofrecen la satisfacción de necesidades que buscan las personas en tránsito. En segundo lugar, porque las condiciones laborales no son óptimas para generar nuevas plazas de trabajo e impiden el desarrollo de nuevos nichos de mercado para comerciantes foráneos. Los flujos migratorios más importantes ocurren hacia afuera, motivados por la búsqueda de mejores condiciones de acceso a medios de vida y educación. “También hay una migración interna de la población de las comunidades Awá desde la reserva hacia la cabecera parroquial de Chical por trabajo como jornaleros, con un promedio de 25 personas semanales por tiempos aproximados de 2 a 3 meses” (GAD El Chical 2015, 25).

En cuanto al empleo “la población económicamente activa de El Chical es de 1134 personas, que corresponden al 33% de la población total” (GAD El Chical 2015). De ellas 1110 personas están ocupadas, de las cuales el 73,54% son de sexo masculino mientras que el 26,46% son de sexo femenino. El 47,9 % de la población son agricultores y trabajadores calificados en ramas agropecuarias, el 23,8 % se dedica a ocupaciones como transporte y almacenamiento de productos, el 3,5 % se dedica a ventas y servicios, el 2,5 % a operaciones militares, el 2,4 % son oficiales, operarios y artesanos y el 19,9 % pertenecen a otros grupos de ocupación, entre los que se encuentran empleados públicos, amas de casa, cuidadores de menores, lavandería, etc. De acuerdo al presidente de la junta parroquial de El Chical, las tres

cuartas partes de los habitantes se dedican a cultivar sus propias tierras, laborando como jornaleros en fincas de propiedad privada individual, familiar o asociativa. Según Ortiz, el jornal representa para cada trabajador entre \$10 y \$20 dólares diarios dependiendo del tipo de trabajo que realicen. Sin embargo, esta cifra no compite con lo que pagan “del otro lado” a los trabajadores de los cultivos de hoja de coca, en donde el jornal puede alcanzar “hasta los \$50 o \$60 dólares” al día, motivo por el que muchos jóvenes prefieren pasar la frontera a trabajar en estos cultivos (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

El turismo también representa un potencial económico para la parroquia; allí existen 5 restaurantes con capacidad para atender a 200 comensales diariamente, así como 4 hoteles con capacidad de 106 camas. La cabecera parroquial cuenta con 5 establecimientos de venta de abarrotes y 2 almacenes de agroquímicos. Sin embargo, el turismo no ha podido ser explotado al máximo porque sobre la región pesa el estigma de considerarla zona roja debido a la presencia de actores violentos no estatales y eventos de confrontación armada entre grupos beligerantes en el lado colombiano. (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019)

Esta percepción de una presencia de actores armados merma las visitas foráneas a la parroquia y significa una reducción de las posibilidades comerciales de la frontera. Anita Morillo opina que esto genera un problema que nace en la falsa idea de que se trataría de una frontera caliente (violenta), lo cual contradice a la realidad de las comunidades locales en donde el clima social es relativamente tranquilo (Entrevista a Anita Morillo, directora encargada de Desarrollo Económico Local del gobierno autónomo descentralizado provincial de Carchi, marzo de 2019). Ortiz a su vez dice que “aquí existen dos realidades” en referencia a la contraposición entre el lado ecuatoriano y el colombiano que, según explica, adolece de un problema socio cultural “muy grave” que es el narcotráfico (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Él asegura que, a través de la frontera, desde Colombia “no ha pasado el problema” hacia el Ecuador (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Hay que subrayar que el chicaleño ofrece una clara distinción entre los grupos beligerantes que pertenecen a actores violentos no estatales y los que pertenecen a grupos armados movilizadados como las guerrillas.

“Hay que ser muy claros de que no es la guerrilla, son narcos, ladrones y bandas delincuenciales que han llegado a convenir ahí para el cultivo de la coca” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Él explicó además que ese problema era notorio hasta el año 2015 y que la parroquia El Chical se vio “salpicada” a través de la utilización de 69 personas de la comunidad como mulas de transporte de alcaloides, lo cual fue controlado mediante el trabajo coordinado entre las autoridades locales, las instituciones de seguridad y los habitantes de la comunidad (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Al conversar con varios pobladores que prefirieron no ser identificados, estos aseguraron que “del otro lado” (en Colombia) existen dichos grupos beligerantes, pero no pasan “para acá” (hacia Ecuador) “porque el rato que pasan les mete bala”.

2.5. Relación comercial binacional Ecuador-Colombia

A través de la frontera norte del Ecuador circula el grueso del transporte terrestre binacional colombo ecuatoriano. Por el viaducto de Rumichaca, principal paso transfronterizo, atraviesan a diario y en condiciones normales cerca de 3500 vehículos de carga mediana y pesada que viajan desde y hacia el interior de cada país. Según cifras del portal Conexión Intal del Banco Interamericano de Desarrollo,

La relación comercial entre Colombia y Ecuador es una de las más importantes entre los países que conforman el Eje Andino; prueba de ello son los significativos flujos de bienes y servicios que se dan en el área, los cuales en 2016 alcanzaron un valor FOB total de US\$ 2.187 millones. De este total el 36,6%, unos US\$ 801 millones, correspondieron a exportaciones desde Ecuador representando alrededor del 5% del total de sus exportaciones para ese año. Entre los 10 principales productos exportados por Ecuador figuran: pescado procesado, aceite de palma, camiones de reparto, automotores, paneles de madera, crustáceos, hierro, papel, gomas de caucho, y cemento. En cuanto a las exportaciones colombianas hacia Ecuador estas ascendieron en 2016 a unos US\$ 1.377 millones, lo que representó alrededor del 4,2% del total exportado por el país ese año, siendo los 10 productos principales: medicamentos envasados, camiones de reparto, plaguicidas, polímeros de polietileno, textiles, productos de belleza, productos de limpieza, plásticos y repuestos para vehículos. Cabe resaltar aquí que, para Ecuador, los envíos desde Colombia alcanzan al 9% del total de sus importaciones, comparable a las que recibe de toda la Unión Europea, las cuales alcanzaron

valores por US\$ 1.772 millones en 2016. En relación con el transporte internacional de cargas por carreteras en la región, este adquiere especial relevancia ya que alrededor del 65% de las exportaciones desde Colombia hacia Ecuador y el 90% de las de Ecuador hacia Colombia se efectúan por esta vía. Como resultado de esto, el último año por el Paso de Frontera de Tulcán – IpiALES se registraron operaciones por un valor aproximado de FOB US\$ 1.500 millones. (BID INTAL 2018).

Como se ha señalado anteriormente esta relación binacional es histórica y ha beneficiado a los habitantes de la zona limítrofe desde antes de la existencia de un borde normativo de separación entre ambos países, mayormente a través del hormiguelo, que es el sistema de comercio minorista de bienes y productos, incentivado en beneficio de uno u otro lado de la frontera a manera de un péndulo, tal como lo explica el ingeniero Diego Tarupí, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, quien en entrevista con el autor aseguró que “hay unas temporadas buenas para Ecuador, en este caso para la ciudad de Tulcán y la provincia del Carchi, y hay unas temporadas para IpiALES y Colombia, esto estaba marcado más o menos cada 5 años este péndulo” (Entrevista a Diego Tarupí, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, marzo de 2019). A raíz de la dolarización el balance pendular tarda mucho más tiempo en beneficio de Colombia y la economía de la frontera ecuatoriana se ha visto perjudicada, lo que ha obligado a productores y comerciantes a buscar estrategias de incentivo económico para combatir este fenómeno:

Estamos pasando ya los 6, 7 años, que por este tema del diferencial cambiario no podemos ser competitivos para poder trabajar hacia Colombia, en la actualidad estamos solicitando a las empresas ecuatorianas para que nos ayuden con precios de frontera para nosotros también poder competir con productos colombianos y de esa manera poder trabajar hacia Colombia. Antes del año 2000, de la dolarización, por el tema de la devaluación el Sucre podíamos ofrecer productos más baratos hacia Colombia, y había un boom de visitantes colombianos hacia Ecuador. Luego de la dolarización pasó todo lo contrario, pasamos a ser un país más caro con el tema del dólar, entonces la mayoría de ecuatorianos pasaban hacia Colombia. Hubo un repunte más o menos en el 2006 o 2007 por el tema de factores externos como la devaluación del precio del petróleo y esas situaciones, el diferencial cambiario estuvo por los 2500 pesos por dólar, en la actualidad está en 3200 pesos por dólar, eso hace que vaya o venga el producto, que nosotros vendamos o que nos vendan los productos (Entrevista a Diego Tarupí, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, marzo de 2019).

Al no tener moneda propia y depender directamente del dólar estadounidense, Ecuador económicamente está en manos de las políticas monetarias de Estados Unidos y las fluctuaciones del comercio internacional. Colombia puede devaluar su moneda, lo cual hace que los precios de los productos en ese país sean menores, así atraen a visitantes compradores -en su mayoría ecuatorianos-, que consumen bienes de primera necesidad, ropa, tecnología, comida, insumos de construcción, etc. Tarupí estima que, ante este fenómeno y la falta de estrategias efectivas de protección para los comerciantes, el cantón Tulcán ha disminuido en más del 80% su capacidad competitiva en relación a Ipiales:

En la actualidad hablamos de que del 100% que era comercial, un 90% de los comercios que teníamos en temporada alta era hacia Colombia, este momento se manda para Colombia un 15% para lo que es temas locales, si hubiera algún tema de beneficio o baja del diferencial cambiario volveríamos a subir los niveles de venta y seríamos una ciudad atractiva para los visitantes y para el comercio transfronterizo (Entrevista a Diego Tarupí, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, marzo de 2019).

En la práctica han existido propuestas de aplicación normativa para combatir este retardo en el efecto pendular de la economía fronteriza, como el Convenio de Esmeraldas, la aplicación de una Canasta Familiar Transfronteriza para consumo de bienes personales, familiares y domésticos, una Canasta Básica Comercial Transfronteriza para comercio de bienes por debajo de un techo presupuestario, entre otras; pero ninguna de esas medidas ha tomado en cuenta su aplicación en las zonas fronterizas rurales o se convierten en laberintos kafkianos para los habitantes de la ruralidad, quienes en su mayor parte no están acostumbrados a sistemas burocráticos de gestión. Ello da lugar a que las personas busquen mejorar sus ingresos saltándose los procesos de normalización de mercaderías, evadiendo impuestos aduaneros, generando sistemas de contrabando ilícito y la incursión en economías de sombra o economías criminales. Tarupí asegura que el comercio ilegal afecta directamente a la economía de todo el cantón, pero en especial al sector productivo agropecuario “por el bajo costo de los productos aquí en el mercado, y que no son competitivos con los de la producción. Tenemos costos de producción un poco más elevados” (Entrevista a Diego Tarupí, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, marzo de 2019).

2.6. Conclusiones

El contexto geográfico de la parroquia El Chical permite la vinculación directa de sus habitantes con sus vecinos más cercanos de la vereda colombiana Tallambí, y los asentamientos poblacionales de diversos orígenes como las comunidades awá, colonos mestizos y montuvios, asentamientos indígenas colombianos que han migrado hacia la parroquia y que conviven además con personal militar ecuatoriano y personal de servicio civil que labora en el sector, como médicos, policías, electricistas, proveedores de gas doméstico, transportistas, profesores, personal de organismos no gubernamentales, turistas y oficinistas de algunas dependencias gubernamentales ecuatorianas. Todos ellos habitan un territorio rico en minerales y altamente cultivable que se ha constituido en un eje de desarrollo de economías formales e informales, ya que tanto se producen alimentos propios de la zona y materias primas para manufacturas y artesanías, como productos y materias primas que alimentan economías de sombra como marihuana, coca, amapola, madera y minerales explotados ilegalmente.

En este contexto la frontera se transforma en una membrana altamente difusa y completamente permeable ya que la convivencia de estos grupos implica que todos compartan el territorio en todos los aspectos de la vida, ya sea desde lo familiar, laboral, económico, cultural y social, pese a que las vías de comunicación entre uno y otro país, o unas y otras comunidades aledañas (por ejemplo, sectores ecuatorianos como Maldonado, San Marcos, Tobar Donoso, etc.) son precarias y en su mayoría constituyen puentes y caminos de herradura. La alta permeabilidad de la frontera se produce por la necesidad de comercio entre todos los habitantes de la región generando cuotas de beneficio mutuo como la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes colombianos que en su país no cuentan con lo necesario para ello y aprovechan esos servicios en Ecuador.

Estos tipos de relacionamiento contrarrestan el aislamiento que estas comunidades viven por parte de las autoridades de los gobiernos centrales de las urbes más alejadas y la carencia de espacios de comercio hacia el interior de cada país. En el siguiente capítulo se podrá observar cómo este contexto y estos modos de interacción social se convirtieron en espacios propicios para el desarrollo de actividades ilícitas que se vinculan directamente con la violencia, la

delincuencia y la guerra interna colombiana, así como los efectos que tuvieron los cambios en las dinámicas entre grupos armados acaecidos tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano.

Capítulo 3. Seguridad, economía y paz en el contexto transfronterizo de la parroquia El Chical

Como se ha podido observar, la geografía de la parroquia El Chical la configura como un espacio apto para el desarrollo agrícola. Sin embargo, su lejanía geográfica respecto a las urbes más grandes e importantes de la provincia del Carchi y el departamento de Nariño hacen que exista una menor presencia estatal en la región, lo cual da paso a que los habitantes puedan optar por trabajar en modelos de desarrollo económico ligados a economías de sombra y actividades irregulares que rozan muy de cerca la ilegalidad y a veces hasta la traspasan. El territorio es montañoso y está atravesado por vegetaciones selváticas, accidentes geográficos y zonas de difícil acceso que obligan a las instancias gubernamentales a mermar la atención para los pobladores en términos de servicios y presencia institucional. Se satisface solamente las necesidades más básicas y se vuelve necesario migrar si es que se requiere profundizar en cosas como la educación, medicina especializada o mercados más amplios para el comercio de productos de entrada o salida de la parroquia.

Este contexto ha valido para que en más de una ocasión el Estado declarase a esta franja territorial como zona roja, debido a la cercanía y participación de actores violentos no estatales. Tal categorización ha exacerbado las limitaciones que impiden el desarrollo pleno de sus pobladores en tanto a niveles de vida y acceso a oportunidades. Un ejemplo de ello es el poco turismo que llega hasta allí, siendo uno de sus mayores potenciales de desarrollo tanto para la parroquia de El Chical y el cantón Tulcán y la provincia del Carchi, a los que pertenece. Esto repercute en las posibilidades de diversificación y ampliación de mercados para los productos agrícolas y manufacturas locales.

En el presente capítulo se analiza cómo las características geográficas, económicas y sociales de la parroquia han incidido en la seguridad, y el desarrollo desde y hacia el sector, haciendo hincapié en la situación a partir de la firma del acuerdo de paz de 2016, para lo cual se consideran los testimonios de varios actores locales y foráneos cuyo conocimiento de la zona es especializado. El capítulo empieza con un análisis de la presencia de actores beligerantes, en especial de los no estatales, y la forma como utilizan a la parroquia como centro de abastecimiento de víveres y enseres para su posterior permanencia en la montaña. Esto se

hace mediante los testimonios de los entrevistados y las observaciones de campo del autor. Las entrevistas permiten delinear los pactos para la gobernanza entre los grupos armados no estatales, y las estructuras de seguridad comunitaria que han adoptado los pobladores para defender al territorio de la delincuencia común, en unión con entidades estatales de seguridad como la Policía Nacional. Más adelante, una segunda parte del estudio permite abordar los efectos que el cambio en las relaciones de poder entre los actores armados colombianos ejerce sobre los modos de vida de los chicaleños, partiendo del hecho de que tras la desmovilización de las FARC las tierras de cultivo y el potencial de extracción minera y maderera pasaron a ser el objetivo de disputas armadas por el control y la gobernanza no estatal. El trabajo de campo permite estudiar las reacciones de los habitantes a estos cambios y sacar ciertas conclusiones sobre la convivencia.

3.1. Cambios en la presencia de actores violentos no estatales en el lado ecuatoriano

La geografía del territorio y la composición del suelo son factores importantes para el surgimiento de economías ilícitas. La variedad de pisos climáticos, la humedad ambiental que desciende del páramo de frailejones de Tulcán, la Reserva Ecológica El Ángel, los humedales del cerro Golondrinas y la ubicación de la parroquia sobre el valle que se forma entre la cordillera Quinshul y la quebrada de Tallambí explican la presencia en la tierra de alrededor de 34 minerales, entre los que predominan el cobre, la plata, el oro y el hierro, por lo que es un objetivo claro para la minería, de la cual una parte se desarrolla ilegalmente (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). El suelo también es propicio para el cultivo de plantas de coca, amapola y marihuana, materias primas de sustancias sujetas a fiscalización. Ambas actividades se hacen presentes en la zona, la minería de forma legal e ilegal, los cultivos de forma ilícita.

Ortíz niega que sobre El Chical haya salpicado parte del conflicto armado colombiano, pero asegura que el lado colombiano ha sido ocupado por el narcotráfico y la delincuencia común desde hace varios años. Él diferencia claramente a estos grupos delincuenciales de la guerrilla colombiana por la posición ideológica de las FARC (de tendencia política marxista leninista), ya que asegura que “ser guerrillero es un honor” y que “donde hay guerrilla ideológica hay desarrollo” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). En su relato revela que la guerrilla mantenía al margen a los grupos delincuenciales a

través de patrullas que ejercían controles sobre el territorio, lo que provocaba esporádicos enfrentamientos armados entre bandas delictivas y tropas guerrilleras (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

En ese contexto la parroquia se torna en un sitio de paso, descanso y abastecimiento. Un espacio neutral sobre el que pesa algún convenio tácito de no violencia. Los criminales hacen uso del suelo para transitar, ya sea que estén ejerciendo algún ilícito o solamente circulen de paso. Los habitantes de la zona los conocen, “ayudan a identificarlos y poner en alerta a la población” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Según Ortiz,

Uno de los narcos viene de vez en cuando aquí. Anda en un carro blindado, pero nadie le dice nada. Se le conoce, se sabe, se tiene el historial de él. Entonces, se le da (le venden productos sin problema). Ellos (los pobladores) no hacen nada y él tampoco hace por actuar aquí. Siempre viene, deja su vehículo, pasa al otro lado, hace sus cosas. No sé qué es lo que haga. Viene y se va (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

Esta dinámica aplica a integrantes de todos los bandos armados y/o criminales. Ecuador es una especie de espacio neutral en el que la interacción bélica del lado colombiano incentiva el movimiento comercial minoritario de la parroquia, a la que acuden los actores violentos no estatales. Durante el trabajo de campo el autor de la presente investigación participó de una minga comunitaria para la construcción de una canaleta junto a un camino de herradura. A lo largo de la jornada de trabajo las conversaciones variaban desde cotidianidades parroquiales y domésticas hasta temas de violencia armada, los cuales eran vistos como algo normal desde la óptica local. Es común escuchar a los habitantes decir que algún joven “se ha ido a trabajar al otro lado”, refiriéndose a los cultivos de coca en suelo colombiano, o que alguna adolescente ha sido embarazada por algún guardaespaldas de alguien, o incluso a los niños decir que algún narcotraficante “les ha gastado una cola a todos los de la piscina”².

² Notas de campo del autor.

Ortiz explicó que las visitas de miembros de grupos armados no estatales al poblado de El Chical traían réditos económicos para la población local puesto que estos siempre compraban alimentación y víveres en cantidades significativas:

En sí ellos son buenos consumidores de alimentos, o sea como están, son grupos grandes, a veces son ciento veinte, doscientos. Entonces, la movilidad. Por eso, es lo que no se puede uno creer que aquí en Chical hay un movimiento económico aceptable porque dónde se vende tantos alimentos, tanta comida, es porque esta gente que está viviendo en la selva y necesita alimentarse y el mercado más cerca es Chical. Entonces, viéndole por ese lado, es positivo para el movimiento económico (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

El sociólogo Santiago Cabrera cree que en esos términos “el conflicto en Colombia terminaba siendo una oportunidad para los pocos comercios que existen en Chical y para los productores agrícolas locales”, además de ser beneficioso para el movimiento de las tiendas y comercios (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020). Explicó, no obstante, que este fenómeno ha tenido altibajos, notablemente con el aumento de las operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas colombianas contra grupos armados no estatales en el área, particularmente enseguida después de la firma del acuerdo de paz de 2016:

La toma de dominio en esta parte fronteriza por parte del Ejército colombiano, supuso enfrentamientos violentos muy complicados del lado de Colombia y, más bien, eso afectó más e hizo disminuir el comercio, porque evidentemente para las personas vinculadas a la guerrilla no era tan fácil atravesar al territorio ecuatoriano para abastecerse. Entonces, más bien, la paz y la toma de posición del Ejército afectaron más que el conflicto armado (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

En general, no han sido pocas las ocasiones en que se ha violado esta neutralidad tácitamente pactada. Secuestros, extorsiones, asesinatos, ajustes de cuentas, etc. son eventos que se han producido en la parroquia eventualmente. Los habitantes incluso saben identificar cuándo se

trata de algún tipo de enfrentamiento armado entre grupos beligerantes del conflicto armado colombiano, si se trata de problemas ligados al narcotráfico o si son enfrentamientos atribuibles a delincuentes comunes. Para este último tipo los comuneros han optado por organizarse en una red de seguridad comunitaria que trabaja con la Policía Nacional del Ecuador para prevenir, enfrentar y detener a los bandidos. Si es alguno de los dos primeros tipos de enfrentamiento, es decir conflictos entre grupos beligerantes del conflicto armado colombiano o entre grupos de narcotraficantes, los comuneros prefieren no meterse (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

La población civil de El Chical se ha acostumbrado a que los grupos armados no estatales hagan su propia justicia en el territorio. Antes de la firma de la paz, ante las deficiencias del Estado para resolver conflictos en la parroquia, las FARC a veces intervenían para solucionar conflictos a nivel local e inclusive ajusticiaban a las personas culpables de graves infracciones. Esta situación cambió con la firma del acuerdo de paz, pero otros grupos han incurrido en prácticas similares, como lo narra Ortiz:

Antes de 2015 teníamos el ajuste de cuentas de los vecinos, y ellos [las FARC] sí los venían a buscar, y eso era lo que a la gente le atemorizaba y sí les llamaba la atención, pero era puntual, exclusivamente con ellos y no se metían absolutamente más con nadie. Entonces, aquí se dice “fue allá entre ellos y entre ellos queda”. Entonces, ellos tienen esa facilidad de no involucrar a los demás. Esa es una ventaja. Nosotros entendemos eso. Por eso, para nosotros no es nada raro. Nosotros estamos ante ese tipo de cosas. Esas muertes son anunciadas. Se veían venir. Se dice “tal persona hizo negocio con los narcos. Entonces, el rato que él falla ellos solo se arreglan con la muerte” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

Según el entrevistado, los enfrentamientos armados entre grupos beligerantes del conflicto armado colombiano cesaron aproximadamente en 2017, posterior a la firma del acuerdo de paz, desde que el Ejército colombiano comenzó a hacer patrullajes en el territorio, pero no ha habido un cambio significativo en la vida de la parroquia. En su relato asegura que “no ha cambiado nada en cuanto al *modus vivendi*” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019). Recuerda que sí llegó un grupo de colombianos que

pidieron autorización para quedarse en El Chical para atender los procesos relacionados a la aplicación del acuerdo de paz. Al parecer, según explica, se trataba de funcionarios vinculados al Ejército colombiano que se fueron desplazando paulatinamente hacia el interior del territorio colombiano, por lo que su grado de agencia en territorio ecuatoriano fue sumamente leve, lo cual constituyó un contrapunto a las expectativas de la población fronteriza, la cual esperaba el ingreso “de entidades gubernamentales, privadas, de ayuda humanitaria, de desarrollo para poder un poco mejorar este ambiente, pero no se ha dado” (Entrevista a Nilo Ortiz, presidente de la junta parroquial de El Chical, febrero de 2019).

3.2. Influencia de los cambios de dinámicas entre actores armados no estatales sobre las dinámicas económicas en El Chical

Desde una visión más amplia, la entrevista con el sociólogo Santiago Cabrera arrojó un análisis importante sobre el papel del Estado ecuatoriano en la seguridad de la frontera tras la firma del acuerdo de paz colombiano. El entrevistado opinó que los niveles de violencia en la frontera eran más importantes de lo que podía percibir la propia población de la parroquia y se había hecho más notoria la diversificación de las economías criminales que actúan sobre el territorio:

Principalmente la violencia está generando un papel en la frontera que fácilmente puede decantar en un Juárez, o algún tipo de esas fronteras de las más calientes de la región, porque tenemos el tema del paso informal e irregular de personas en movilidad humana por el que ya se ha comenzado, desde algunos meses, a generar alertas de redes y organizaciones en torno a la trata de personas, al coyoterismo, etc. Entonces, eso ya es complicado y lo otro, aun cuando he dicho que es una economía de subsistencia y se ha constituido en algunos casos como la única fuente de trabajo en algunas familias, no deja de estar al margen de la ley, es decir, no dejan de saltarse las regulaciones que el Estado ecuatoriano ha generado para términos de comercio. Esto hace que se comience a darle el tinte de peligrosidad porque las personas comienzan a organizarse para hacer esta actividad y paulatinamente buscan dominar los pasos informales y ya se han dado situaciones violentas con personas que incluso han perdido la vida por personas que participan de estos conflictos con estos grupos que buscan manejar la frontera (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

Él coincide con Ortiz en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que la aplicación del proceso de paz no se dio en función de las expectativas que se habían creado en los habitantes; en segundo lugar, que las FARC ejercían control sobre el territorio. De esta manera, Cabrera explica que hubo una carencia de prospectiva en la planificación de las estrategias de aplicación del acuerdo de paz de 2016, pues no se previó la disputa territorial que vendría tras la desmovilización de las FARC de los territorios que estaban bajo su vigilancia. Desde su óptica la afectación social de estos cambios podría ser mucho más fuerte e importante que los enfrentamientos armados, en especial la llegada de muchos colombianos desplazados por la violencia armada:

No hay que despistarse de que en algunos territorios las FARC eran el ejército casi regular. Eran los que generaban seguridades, etc. En algunos territorios colombianos estaban completamente gobernados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, al generarse esta desmovilización, más bien se genera, ahí sí, un escenario de mayor inseguridad que decantó en enfrentamientos entre fracciones e incluso de grupos que no eran parte de las FARC y que en ese momento veían la oportunidad de tomarse esos territorios y fue generando mayor desplazamiento. Y esto ha generado una presión importante sobre la ciudad, sobre todo sobre las parroquias rurales, en donde los migrantes intentan encontrar trabajos como jornaleros u otras cosas. Entonces, tenemos una gran presencia de personas desplazadas sin posibilidades de regularizarse porque no cuentan con los papeles para ello, ya que, en un escenario de guerra, al momento de huir para salvar la vida de la familia, en lo último en que se piensa es en las cosas que se deben llevar, mucho menos documentos y papeles. Entonces, esto genera presión sobre la poca respuesta que ha habido en torno a esta problemática (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

A su vez, esta situación ha tenido varias implicaciones a nivel social. Por ejemplo, Cabrera cree que la desconcentración de fuerzas entre los actores armados no estatales, el apareamiento de nuevos grupos criminales y el endurecimiento de crímenes como secuestros y trata de personas pueden provocar también que la población civil opte “por armarse para defenderse” ante un enemigo difuso (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020). Así, asegura que “mientras el conflicto tenía distinguido claramente cuáles eran los contradictores, no generaba tanto riesgo a la seguridad de la frontera ecuatoriana” (Entrevista

a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020). Peor aún, la respuesta estatal más fuerte y notoria fue la militarización, lo cual tiende a exacerbar un ambiente de presión sobre la población local y los mismos grupos armados del lado colombiano:

El tener veinte militares en un destacamento y resulta que al día siguiente en la mañana tienes cien, sin duda genera, primero, una sensación de desconfianza, pues a lo mejor voy a necesitar armarme yo también y esto influye directamente en la parte anímica y psicológica, quizás haya un mayor consumo de productos, pero sin duda se modifica la dinámica social y se puedan generar problemáticas alternas como embarazos adolescentes, por ejemplo, que son problemas muy reales y muy complicados (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

Cabrera cree que esta visión militarista no es exclusiva de los Estados ecuatoriano y colombiano, sino que incluso la cooperación internacional ha orientado una gran cantidad de recursos al fortalecimiento militar y armamentista y ha dejado de lado necesidades más importantes como transferencias tecnológicas, técnicas y de conocimientos, modelos de dinamización de la economía local, mejoramiento de la infraestructura para la educación, mejoramiento vial. La priorización estatal de las cuestiones de seguridad ha hecho que se descuide el desarrollo socioeconómico de la parroquia y proliferen las actividades económicas informales e inclusive ilícitas que permiten a muchos pobladores locales sobrevivir. Para él la situación sería diferente si la gente tuviera mayores oportunidades económicas y pudiera acceder a empleos legales que les permitieran vivir en condiciones dignas. En sus palabras, “si mujeres y jóvenes encuentran mayores posibilidades de empleo, aunque la ganancia o el pago no sea igual que en una actividad irregular, seguramente van a ser más los que opten por su seguridad personal y eso genera seguridad colectiva” (Entrevista a Santiago Cabrera, ex jefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán, agosto de 2020).

En estas circunstancias, la firma del acuerdo de paz y los reacomodos entre grupos armados no estatales en Colombia luego de la desmovilización de las FARC no resultaron en cambios significativos en las dinámicas económicas en la parroquia de El Chical. Al contrario de lo

que esperaba la población local, el Estado ecuatoriano mantuvo el mismo enfoque de seguridad en esta zona porque luego de la salida de las FARC varios grupos armados no estatales se enfrentaron por el control de los territorios anteriormente dominados por esta guerrilla. Esto hizo que la población de la parroquia siguiera sintiéndose al margen del desarrollo socioeconómico y tuviera que recurrir a actividades económicas informales e inclusive ilegales para subsistir. La calificación de El Chical como “zona roja”, en particular, hizo que la parroquia no pudiera potenciarse como atracción turística y disuadió a posibles comerciantes de comprar los productos agrícolas de producidos por la comunidad. En estas circunstancias, los comerciantes de locales siguieron aprovechando la presencia de los distintos grupos armados no estatales que llegaron a abastecerse en los diferentes locales comerciales de la parroquia luego de la desmovilización de las FARC, mientras que los agricultores mantuvieron las mismas dificultades para vender sus productos fuera de la localidad y algunos pobladores continuaron involucrándose directamente o indirectamente en actividades económicas vinculadas al contrabando, a la minería ilegal o al narcotráfico a modo de sobrevivencia.

En síntesis, el abandono del territorio por parte del Estado permitió que la región sea controlada por las FARC durante muchos años, tiempo en el que los guerrilleros ejercieron sistemas de gobernanza y control social. La firma del acuerdo de paz en 2016 no previó que el retiro de las tropas rebeldes ocasionaría un vacío de poder y generaría una serie de conflictos entre otros actores violentos no estatales. Los pobladores han tenido que adaptarse a una nueva realidad en la que es mejor callar y ser testigos mudos de las confrontaciones para no verse salpicados por la violencia y, en su lugar, han desarrollado sistemas de adaptación a la nueva realidad para tratar de sacar partido sin ser agentes activos del conflicto, sino aprovechando las dinámicas de comercio que genera la presencia de los nuevos actores beligerantes, lo cual dista mucho de ser un cambio esencial en el modo de vida que llevaban antes de la firma del acuerdo. El Chical convive con un conflicto silencioso por conveniencia, pero que en ciertos momentos se vuelve manifiesto a través de los eventuales estallidos de violencia que se producen cuando los pactos tácitos de cooperación entre los grupos beligerantes se rompen por algún motivo.

3.3. Conclusiones

En El Chical el conflicto armado colombiano ha sido históricamente parte de su desarrollo comunitario y los habitantes de la parroquia han germinado modos de vida vinculados a la existencia de los grupos armados, especialmente de la guerrilla de las FARC que no solamente constituyeron mercados potenciales para la compra venta de productos de la localidad, sino que además formularon modelos de gobernanza, control social y generación de empleos. Así, la guerra interna de Colombia llegó a significar oportunidades de crecimiento económico dentro y fuera de los márgenes legales de ambos países para los pobladores locales. A su vez, las FARC mantenían un esquema de seguridad basado en el control del territorio ante los potenciales grupos beligerantes ligados al narcotráfico y la delincuencia común.

La respuesta de los Estados de Ecuador y Colombia ha sido mayormente realista y se hizo efectiva mediante intervenciones esencialmente militares, descuidando aspectos de desarrollo social vinculados a otros componentes como educación, empleo legal y digno, atención y satisfacción de necesidades básicas y apertura de puentes comerciales hacia mercados lícitos. Si bien los chicaleños aprendieron a sacar provecho económico de la guerra, las acciones militaristas de los Estados empujaron a los actores violentos no estatales hacia el interior del país colombiano, alejando a los compradores potenciales de los mercados de la parroquia El Chical y disminuyendo así las posibilidades de seguirse desarrollando económicamente, aunque estas posibilidades volvieron a aparecer con el reacomodo de los grupos armados colombianos en la frontera posteriormente. A partir de la desmovilización de la guerrilla de las FARC luego de la firma del acuerdo de paz de 2016, los parroquianos se vieron enfrentados a nuevos actores violentos que en su disputa por llenar el vacío de poder sobre el territorio desconocieron los pactos tácitos con que se mantenían los modelos de gobernanza, exponiendo a los lugareños a nuevas violencias que en veces llegaron a tocar también a la población civil.

Conclusiones

En esta tesis se buscó analizar cómo las dinámicas económicas y de seguridad en la parroquia ecuatoriana de El Chical, fronteriza con Colombia, cambiaron o se mantuvieron a raíz de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Este análisis se llevó a cabo a partir de nueve entrevistas semiestructuradas, dos conversaciones informales y fuentes documentales. En este capítulo de conclusiones se sintetizan los principales hallazgos de la investigación.

La frontera entre Ecuador y Colombia presenta características que la convierten en una frontera viva en la cual cohabitan personas de ambos países ocupando conjuntamente los territorios aledaños, separados por apenas unos pocos metros de distancia entre un país y otro. El borde limítrofe es una ficción moderna impuesta normativamente por los Estados, que se contrapone a la tradición histórica de comunión binacional. La parroquia El Chical es un claro ejemplo de que las fronteras no dividen a sus habitantes, porque las raíces culturales ancestrales, las fiestas religiosas, las ceremonias, los eventos importantes del calendario, la música, la danza y el idioma son los mismos en los dos territorios y tienen una tradición histórica. La misma convivencia, la misma alegría, los nacimientos, las muertes, las lágrimas y la soledad están compartidos por gente común con prácticas comunes. Uno de los actos más simbólicos de los seres humanos, el intercambio monetario, se unifica en función de la convivencia, adoptando la divisa de un país a conveniencia del comercio.

El comercio de hormiga tiene la capacidad de romper fácilmente la asimetría impuesta por las normativas estatales de cada país y los flujos globales de valor monetario de cada divisa internacional. Se saltan así las políticas económicas que en su mayoría son pensadas para su aplicación a nivel macro y ejecutadas en los grandes flujos comerciales que atraviesan de un Estado a otro por las urbes principales y los pasos fronterizos autorizados por los Estados. La zona rural se vuelve invisible ante las políticas de incentivo económico que adoptan Ecuador y Colombia, y los pequeños mercaderes abren vías de comunicación comercial a través de la porosidad de los límites y por debajo de las leyes.

Al tener mejores posibilidades de acceso a servicios, la porción ecuatoriana del suelo compartido se convirtió en el espacio destinado a la satisfacción de necesidades, lo cual fue un factor determinante para que existiera un pacto tácito de neutralidad sobre El Chical. Las micro economías cotidianas de la parroquia se insertaron involuntariamente en redes de comercio ilícito que crecieron paulatinamente en importancia como si se tratase de una espiral. Por ejemplo, a través del contrabando de mercancías sin declaración aduanera esta zona se convirtió en paso de precursores químicos para la elaboración de drogas, armas y explosivos. Otro ejemplo son las apuestas en eventos deportivos organizados por los parroquianos casi de forma improvisada, en las que, al momento de realizar esta investigación, circulaban a diario cientos de dólares que los trabajadores se jugaban en campeonatos de voleibol, fútbol, billar o cartas. Estos eventos aparentemente inofensivos muchas veces involucran circuitos de lavado de dinero proveniente de economías de sombra y la vinculación con la comunidad de actores violentos no estatales, bandas criminales menores, narcotraficantes, laboratoristas que elaboran estupefacientes, fabricantes y comerciantes de armas, tratantes de personas, secuestradores, etc.

La simbiosis desigual entre El Chical y Tallambí ofrece posibilidades de vinculación social que terminan creando un espacio anárquico interestatal, que busca aprovechar de cada lado de la frontera los beneficios normativos y los vacíos legales. El fenómeno resultante es un espacio de cohabitación que juega con la legalidad a conveniencia, aprovechando dos mundos legalmente diferentes, pero culturalmente idénticos. En ese escenario el comercio es inevitable y se inserta en dinámicas que juegan bajo esas mismas reglas de asimetría, acomodándose en función de los beneficios, incluso en una atmósfera de confrontación bélica, como la que ha afectado el territorio desde décadas y no ha cesado con la firma del acuerdo de paz de 2016.

Esta realidad podría suponerse amenazante para la convivencia de un pueblo tan pequeño como el de El Chical, pero, no así, los pobladores optaron por el silencio cuando se trataba de hablar sobre estos temas o de definir a los grupos armados no estatales que han tenido presencia en su territorio. Así, casi siempre alegaron que en la parroquia “no hay nada” referente a algún conflicto armado y, si se llegaba a demostrar que sí lo había o los actos de violencia se volvían manifiestos, entonces el discurso cambiaba y decían que eso sucedía “del

otro lado”, apuntando implícitamente al territorio colombiano. No obstante, algunos de los pobladores entrevistados y fuentes externas que conocen la situación en la parroquia fueron inequívocos en cuanto a la presencia e influencia de diferentes actores armados en el territorio, en particular de las FARC, y de la presencia e influencia de nuevos actores armados a partir de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y esta guerrilla en 2016.

La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC supuso una breve ruptura en la asimetría de la que se beneficiaban los pobladores de ambas localidades y una alteración violenta del espacio anárquico transfronterizo, pues la desmovilización de la guerrilla dejó un vacío territorial que generó una serie de conflictos entre varios grupos de actores violentos no estatales. En principio, los beneficios que habrían de llegar con la paz al territorio serían a largo plazo, pero los habitantes no los sintieron así. La intervención del Gobierno colombiano, especialmente mediante acciones militares, no tardó en trasladar paulatinamente las labores hacia territorios ubicados más hacia el interior del departamento nariñense, abandonando a los habitantes del borde nuevamente a merced de gobernanzas rebeldes y criminales de parte de distintos grupos armados no estatales. Esto supuso una lucha entre actores violentos no estatales al interior de espacios relativamente pequeños de territorio, por el control de la producción minera y agrícola y los cultivos ilícitos en áreas estratégicas de la zona fronteriza.

El Chical se vio salpicado indirectamente por estos enfrentamientos, lo que incrementó la sensación de inseguridad y desconfianza dentro de la parroquia, mientras que desde afuera la visión institucional era que el territorio era una zona roja, con lo cual se justificó la respuesta de tinte realista a través de la militarización y patrullaje de la línea de frontera. Esto mermó las posibilidades de potenciación turística e incrementó el recelo de posibles comerciantes en busca de productos agrícolas para mercados de las urbes más grandes. Las disputas por el control territorial de ese espacio provocaron movimientos en los actores violentos no estatales y los patrullajes del Ejército colombiano.

Sin embargo, hacia adentro, en lo referente al comercio local, el nivel de compra venta no disminuyó en gran medida, pues la parroquia continuó como centro de abastecimiento, descanso, paso y acceso a servicios para integrantes de distintos grupos armados. Los

productos que se venden no variaron grandemente desde la firma de la paz, pero sí los compradores, que cambiaron de acuerdo a la presencia de determinados grupos en el territorio, por ejemplo, de disidentes de las FARC que decidieron no participar del proceso de paz o de bandas de criminales comunes. Algunos pobladores locales, especialmente los jóvenes, continuaron siendo reclutados para trabajar como jornaleros en los cultivos ilícitos, que siguieron produciendo materias primas para psicotrópicos y estupefacientes.

La respuesta mayormente militarista de los dos países durante el primer período de aplicación de la paz en la frontera obvió aspectos tanto o más importantes para el progreso de los pueblos como la apertura de nuevos mercados para la producción local, el desarrollo de programas y planes de avance social, cultural y comunitario y la generación de empleos dignos que incentivasen a los pobladores, especialmente los jóvenes, a optar por actividades lícitas para su subsistencia que no representen un riesgo para sus vidas. Los pocos incentivos que se llevaron a cabo en este sentido se esfumaron rápidamente y las expectativas que tenían los lugareños respecto al anhelado alcance de la paz fueron mermando poco a poco, incrementando el pesimismo acerca de las posibilidades que la terminación de la guerra ofrecía. La poca prospectiva de los gobiernos ante lo que podía resultar del abandono del territorio por parte de la guerrilla permitió el apareamiento de nuevos actores violentos y nuevas luchas armadas que llegarían a afectar a la población civil. A estos nuevos actores habrían de acostumbrarse los lugareños a fin de retomar las actividades comerciales que les permitían mantener a flote sus pequeños mercados.

Esta investigación ofrece un primer vistazo a los efectos del cambio en las formas de interacción entre los pobladores de la frontera ecuatoriana con sus pares colombianos y los modos de relacionamiento entre los nuevos grupos beligerantes de un conflicto que al parecer no ha terminado, sino que está en constante mutación hacia otros protagonistas y otras formas de violencia, aún después de que se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno colombiano y la más grande guerrilla de la historia de ese país. Esta perspectiva abre un sinnúmero de interrogantes en relación a los efectos que ha tenido y puede tener el alcance de la paz para los territorios marginales de Colombia y Ecuador respecto a los grupos armados y la diversificación de los sectores de poder sobre las fronteras, las formas de relacionamiento entre estos territorios y otras fronteras de la región a través de crímenes transnacionales y las

posibles respuestas que pueden dar tanto los países como los organismos locales, nacionales e internacionales para mitigar y contrarrestar la expansión de la delincuencia como fenómeno globalizado que vincula a estas pequeñas poblaciones transfronterizas con redes criminales transnacionales en las que se involucran otros Estados, otras ciudades y otros pueblos a lo largo de toda la región.

Este trabajo permite entender cómo funciona la anarquía en las fronteras interestatales cuando las relaciones sociales se fundamentan en términos de culturas compartidas; brinda una mirada crítica respecto a la participación de los Estados en cuanto a la aplicación de la paz, que no solo tiene que ver con Colombia, sino además con las poblaciones limítrofes ecuatorianas y permite ver cómo la guerra puede ofrecer ciertas posibilidades de supervivencia para territorios tradicionalmente abandonados por los Estados, tanto en términos económicos como de poder, gobernanza y protección. Estas posibilidades deberán ser reemplazadas por otras mejores en la aplicación de eventuales acuerdos de paz en el futuro.

Referencias bibliográficas

- Aedo, Angel. 2017. "Encarnando (in)seguridad. Orden policial y política de la presencia en la frontera norte de Chile." *Revista de Antropología y Arqueología*, n° 29: 87-103.
- Anzaldúa, Gloria. 1999. *Borderlands/La frontera: the new mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books.
- Arnson, Cinthia, y William Zartman. 2006. "Economías de guerra: La intersección entre necesidad, credo y codicia." (Centro de Investigación para la Paz).
- Baud, Michiel, y Willem Van Schendel. 1997. *Toward a Comparative History of Borderlands*.
- Bedón, Washington, y Rodolfo Salazar. "Dinámica de las amenazas en el estado ecuatoriano y la afectación a su seguridad y defensa." *Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa* 4, n° 7 (2019): 58-74.
- BID INTAL. *Conexión Intal*. 2 de mayo de 2018. <https://conexionintal.iadb.org/sobre-bid-intal/> (último acceso: 14 de Agosto de 2021).
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. New York: Oxford.
- Carrión, Fernando. 2011. "Economía de frontera: una atracción fatal." *Fronteras* (FLACSO) 1, n° 7: 1-10.
- Carrión, Fernando. 2013. "La alteridad transfronteriza: negación y afirmación." En *Aproximaciones a la frontera*, de Fernando Carrión, Johana Espín y Mejía Diana, 317. Quito: FLACSO.
- Ceballos, Marcela, y Gerardo Ardila. 2015. "The Colombia–Ecuador Border Region: Between Informal Dynamics and Illegal Practices." *Journal of Borderlands Studies* 30, n° 4: 519-535.
- Chagas, Fabrício. 2018. "Colombia's Peace in Tatters." *Journal of Peacebuilding & Development* 13, n° 2: 127-134.
- Conde, Fernando, y Marlo Orbe. 2020. "Grupos irregulares armados en el conflicto de la frontera colombo ecuatoriana y su relación con el narcotráfico." *Military Review: Revista Profesional del Ejército de EUA* 2020, n° 2: 15-25.
- Duffield, Mark. 2001. *Global Governance And The New Wars*. Londres y Nueva York: Zed Books.
- El Comercio. 2018. "El Pulso de la Frontera Norte." *El Comercio*, agosto de 2018.
- . "Los vecinos incómodos de la frontera norte." *El Comercio*, 8 de abril de 2018.
- . "El ELN y disidentes de las FARC se disputan zonas frente a El Chical." 16 de febrero de 2018.
- . *El ELN y disidentes de las FARC se disputan zonas frente a El Chical*. 16 de febrero de 2018. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/eln-disidentes-farc-elchical-frontera.html>.
- El Universo. 2020. *Matanzas y amenazas en la frontera colombiana atemorizan a Carchi y a indígenas Awá*. 24 de agosto de 2020. <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/23/nota/7952527/carchi-narcotrafico-asesinatos-inseguridad-frontera-norte-indigenas/>.
- . *Vuelta a las armas de las FARC causa alarma en Carchi*. 7 de septiembre de 2019. <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/09/07/nota/7506394/vuelta-armas-farc-causa-alarma-carchi/>.
- España, Sara, y Ana Marcos. 2018. "El conflicto en la frontera entre Ecuador y Colombia lleva años cocinándose." *El País*, 12 de abril de 2018: 1-10.
- GAD Carchi. 2019. *Plan de Ordenamiento Territorial del Carchi*. Tulcán: GAD Carchi.

- GAD El Chical. 2021. *El Chical: Datos Generales*. <https://chical.gob.ec/carchi/datos-generales/>.
- GAD El Chical. 2015. “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de El Chical 2015 -2019.” Tulcán.
- GAD Provincial del Carchi. 2015. “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Provincia del Carchi 2015 - 2019.” Tulcán.
- GADM Tulcán. 2015. “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Tulcán 2015 - 2019.” Tulcán.
- García, Viviana, y Luís Trejos. 2021. “Las tramas del conflicto prolongado en la frontera colombo-venezolana: un análisis de las violencias y actores armados en el contexto del posacuerdo de paz.” *Colombia Internacional*, n° 105: 89-115.
- Garzón, Juan. 2021. “En 2021 la confrontación armada disminuye, pero la violencia contra civiles aumenta.” *Fundación Ideas para la Paz (FIP)*: 1-13.
- González, Sindy. 2018. “Migración indígena en la frontera Colombia-Ecuador: del conflicto armado a la Agenda de Seguridad Binacional.” *Revista Ópera*, n° 23: 7-26.
- Goodhand, Jonathan. 2008. *War, Peace and the places in between: Why borderlands are central*. Inglaterra: Palgrave Macmillan.
- Guerrero, Emmanuel. 2018. “El dispositivo frontera.” *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública* 2, n° 2: 133-150.
- Idler, Annette. 2019. *Borderland battles : violence, crime, and governance at the edges of Colombia’s war*. Estados Unidos de América: Oxford University Press.
- Idler, Annette. 2012. “Exploring Agreements of Convenience Made among Violent Non-State Actors.” *Perspectives on Terrorism* 6, n° 4: 63-84.
- Idler, Annette. 2012. “Exploring Agreements of Convenience Made among Violent Non-State Actors.” *Perspectives on Terrorism* 6: 63-84.
- Idler, Annette, Cécile Mouly, y María Belén Garrido. 2018. “Between shadow citizenship and civil resistance: shifting local orders in a colombian war-torn community.” En *Local peacebuilding and legitimacy : interactions between national and local levels*, de Christopher Mitchel y Landon Hancock, 244. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Idler, Annette, y James Forest. 2015. “Behavioral Patterns among (Violent) Non State Actors: A Study of Complementary Governance.” *Stability International Journal Of Security & Development* 4(1).
- INEC. “Canton Tulcán.” 2010. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/Carchi/Fasciculo_Tulcan.pdf.
- INEC. “Censo de Población y Vivienda 2010”.
- Kaldor, Mary. 2012. *New & old wars: organized violence in a global era*. Cambridge: Polity Press.
- Keen, David. 1998. *The Econmic Functions of Violence in Civil Wars*. Oxford: Oxford University.
- Lauret, Sander. 2009. *La frontera norte ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano : las sorprendentes dimensiones de la dinámica trasnfronteriza entre la provincia de Carchi y el departamento de Nariño*. Quito: Abya Yala.
- Levy, Jack. 2002. “Qualitative Methods In International Relations.” En *Evaluating Methodology in International Studies*, de Frank P. Harvey Michael Brecher, 194. Michigan: University of Michigan Press.
- Miranda, Boris. 2018. “Por qué la paz de Colombia le está saliendo cara a Ecuador.” *BBC Mundo en Colombia*, 19 de abril de 2018: 1-13.

- Mouly, Cécile, Annette Idler, y Belén Garrido. 2019. "Noviolencia e imparcialidad." En *Resistencias noviolentas en América Latina*, de Annette Idler, 1-230. Quito, Ecuador: Editorial FLACSO Ecuador.
- Peña, Cipriano, Paola Sierra, y Juan Hoyos. 2019. "La política de fronteras de Colombia ante las nuevas amenazas de seguridad y defensa." *Revista Científica General José María Córdova* 17, n° 28: 773-795.
- Prefectura de Carchi. 2021. *Carchi: Datos Informativos de la Provincia*. <https://carchi.gob.ec/2016f/index.php/carchi/informacion-provincial.html>.
- R4V. 2021. *R4V*. s.f. (último acceso: 15 de Enero de 2021).
- Ríos, Jerónimo. 2017. *Breve historia del conflicto armado en Colombia*. Vol. 611. Madrid, España: Catarata.
- Ríos, Jerónimo. 2016. "Dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia." *Revista de Ciencias Sociales* 22, n° 3: 84-103.
- Ríos, Jerónimo. 2017. "El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta." *Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades* (Universidad de Sevilla) 19, n° 38: 593-618.
- Rivera, Renato, y Carlos Bravo. 2020. "Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico." *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, n° 28: 8-29.
- Ruíz, Gabriela. 2015. "Rutas fronterizas del contrabando en Ecuador." *Perfil Criminológico* (FLACSO) 1, n° 15 (junio 2015): 1-16.
- Saint, Héctor. 2017. *Amenazas globales consecuencias locales, retos para la inteligencia estratégica actual*. Quito: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Senplades - DNP - PFP. 2014. "Plan Binacional de Integración Fronteriza." *Secretaría Nacional de Planificación*. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/PLAN-BINACIONAL-28-11-2014baja.pdf> (último acceso: 25 de Agosto de 2021).
- TeleAmazonas. 2020. *Desmantelan laboratorio de procesamiento de cocaína en Carchi*. 5 de octubre de 2020. <https://www.teleamazonas.com/desmantelan-laboratorio-de-procesamiento-de-cocaina-en-carchi/>.
- Torres, Arturo. 2021. *La guerrilla del ELN y su silenciosa expansión en Ecuador*. Vers. <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/eln-colombia-ecuador-venezuela-narcotrafico/>. 26 de marzo de 2021.
- Vasco, Carlos. 2016. "Problemas fronterizos en Ecuador con Colombia II: provincia del Carchi." *Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa* 1, n° 4: 27-42.
- Wendt, Alexander. 1992. *Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics*. Winstonsin: MIT Press.

Anexos.

Anexo 1: Lista de personas entrevistadas

Entrevistas semiestructuradas

	Nombre	Profesión/cargo	Lugar	Fecha
1	Nilo Ortiz	presidente de la junta parroquial de El Chical	Parroquia El Chical, oficina de la Junta Parroquial de Chical	12 de marzo de 2019
2	Economista Anita Morillo	directora encargada de Desarrollo Económico Local del gobierno autónomo descentralizado provincial de Carchi	Tulcán, Oficina de Desarrollo Económico Local del gobierno descentralizado provincial de Carchi.	20 de marzo de 2019
3	Ingeniero Diego Tarupí	presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán	Tulcán, Oficina de la Cámara de Comercio de Tulcán	21 de marzo de 2019
4	Sociólogo Santiago Cabrera	exjefe de cooperación internacional del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tulcán	Internet, a través de la plataforma Zoom	31 de julio de 2021
5	P1 (confidencial)	poblador	Parroquia El Chical	14 de marzo de 2019

6	P2 (confidencial)	poblador	Parroquia El Chical	14 de marzo de 2019
7	P3 (confidencial)	poblador	Parroquia El Chical	14 de marzo de 2019
8	P4 (confidencial)	poblador	Parroquia El Chical	15 de marzo de 2019
9	P5 (confidencial)	poblador	Parroquia El Chical	15 de marzo de 2019

Comunicaciones personales y conversaciones

	Nombre	Profesión/cargo	Tipo de comunicación	Fecha
1	Wilson Raza	agrónomo tulcaneco	Conversación personal (oral)	20 de junio de 2019 21 de junio de 2019
2	O1	persona que ha trabajado para un organismo internacional en El Chical	Conversación personal (oral)	20 de marzo de 2019

